



HAL
open science

El impacto del conflicto político sobre las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela: el dilema entre participación y representación

Luis Gómez Calcaño

► **To cite this version:**

Luis Gómez Calcaño. El impacto del conflicto político sobre las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela: el dilema entre participación y representación. Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (12. 2006. Santander): Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España, 2006, s.l., España. pp.701-727. halshs-00103677

HAL Id: halshs-00103677

<https://shs.hal.science/halshs-00103677>

Submitted on 5 Oct 2006

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

EL IMPACTO DEL CONFLICTO POLÍTICO SOBRE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN
VENEZUELA: EL DILEMA ENTRE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Luis GÓMEZ CALCAÑO
Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES
Universidad Central de Venezuela
gomezcal@cantv.net

RESUMEN: En los años recientes, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos venezolanos y la intensidad del conflicto sociopolítico han producido una ocupación de espacios políticos por organizaciones de la sociedad civil, lo que ha implicado para ellas un conjunto de nuevos problemas de identidad y representatividad. Se estudia cómo en algunas de esas organizaciones se manifiestan los problemas de la “disolución de las fronteras” entre las esferas social y política, y las formas en que ellas han enfrentado dichos problemas. Se concluye que esta difuminación de las fronteras puede ser un hecho cada vez más frecuente y podría dar lugar a nuevos tipos de actores híbridos, que sin embargo no parecen haber resuelto el problema de su representatividad y legitimidad como actores sociales y políticos.

Palabras Clave: Actores sociopolíticos, representatividad, identidad, conflicto político, Venezuela

INTRODUCCIÓN

En este trabajo intentamos analizar algunos de los impactos de la conflictiva transición sociopolítica venezolana en la estructura y acción del complejo campo de actores que abarca el término “sociedad civil”. Para ello reconstruiremos algunos de los procesos sociopolíticos en los cuales se han visto involucrados estos actores, procesos en los cuales se va perfilando, no sólo la natural diversidad de este campo, sino el enfrentamiento entre diferentes concepciones de la sociedad civil, inevitable en el contexto de las intensas luchas políticas de la coyuntura reciente. En lugar de un campo ordenado donde cada actor conoce sus límites e interactúa por medio de instituciones estables, la transición produce actores híbridos y muchas veces efímeros que disuelven las fronteras entre el “movimiento social”, el grupo de presión y la organización política; que en algunos casos se enfrentan radicalmente al Estado y en otros dependen de su protección para sobrevivir; que pretenden diferenciarse al máximo de los partidos políticos pero a veces entran en peligrosas alianzas con ellos; que se enorgullecen de su identidad civil pero sienten una incomprensible fascinación por los militares; actores, en fin, tan inciertos como el futuro de las instituciones.

Dados los antecedentes históricos de resistencia a la modernidad de los imperios ibéricos, las dificultades para la consolidación de Estados nacionales y las tensiones sociales de los países de América Latina, la idea de sociedad civil en esta región parece corresponder menos a un conglomerado de asociaciones estables centradas alrededor de intereses claramente definidos en la esfera de lo social y separados de lo político, que a un conjunto de actores híbridos, conflictivos y de identidades cambiantes que se encuentran en los márgenes de las instituciones establecidas, sin estar completamente excluidos ni incluidos. Algunos recorren el camino que los lleva a convertirse en actores políticos; por la dinámica propia de su acción o por la influencia de los cambios en el entorno político-institucional, desbordan del campo de lo social al de lo político, sin perder por ello su referencia a reivindicaciones o identidades parciales.

Independientemente de las grandes diferencias entre el contexto sociopolítico de estas organizaciones y el que dio origen a la noción, la universalización del concepto y su connotación generalmente positiva parecen haber influido en que ellas busquen articularse alrededor de la idea de *Sociedad Civil* como eje simbólico de referencia. A pesar de la conocida imprecisión y maleabilidad del concepto, o precisamente a causa de ellas, la autoidentificación de ciertos actores como *pertenecientes a y constructores de* sociedad civil parece ser un instrumento de formación de identidades, un modelo de organización social alternativo, y hasta un mito político movilizador, que parece haber contribuido al establecimiento de redes organizativas y de incipientes identidades colectivas que articulan los intereses particulares de esa diversidad de actores

Ciudadanía y sociedad civil en Venezuela: algunos antecedentes.

Desde el momento de su independencia hasta el impacto petrolero, Venezuela se debatió entre un proyecto liberal, que fundó la nación, y una realidad “atrasada” a los ojos de las elites internas y externas. A pesar de disponer de una institucionalidad formal liberal, se estaba lejos de contar con un Estado de Derecho, una sociedad civil autónoma y clases productivas modernas. Del lado de los sectores populares la ciudadanía era muy precaria. Al serles negado todo tipo de ciudadanía formal y legal, llegaban a ella parcialmente insertándose en las pirámides caudillistas, que les permitían la única forma posible de participación sociopolítica: la guerra civil ocasional, en la cual el peón se convierte en una especie de “ciudadano armado” que temporalmente invierte las jerarquías sociales y económicas por la vía del asalto al poder y el saqueo.¹ La sociedad venezolana estaba atrapada entre un proyecto que sus elites profesaban y una realidad material, económica, social y política que se lo impedía.²

¹ ...”el caudillismo constituye la forma a través de la cual los sectores dominados, en conjunción con algunos grupos o individualidades de los dominantes, se mancomunan para lograr en conjunto, imponer o hacer sentir su peso social y político. [...] En lo referente a las adhesiones de base, es decir a las razones por las cuales el peón se hizo soldado en forma que al menos inicialmente fue voluntaria, es necesario señalar en primer término la dureza y las limitaciones de la relación de peonaje, si se quiere más duras que la vida del guerrillero, y... la reacción contra la disciplina social presente desde los mismos años de la Guerra de Independencia...” (Carvalho, 1990: 27-33).

² Sin embargo, Mijares de Lauría (1996) difiere de esta visión, encontrando en historiadores venezolanos de los siglos XIX y XX la presencia de una “tradición civilista” apoyada en la autonomía y continuidad de la gestión municipal.

Bajo el impacto del petróleo, se produce un período de inestabilidad política entre 1928 y 1958, que incluye cuatro golpes de Estado y numerosas insurrecciones. Los actores parecían incapaces de establecer acuerdos sobre la apropiación y distribución de la inesperada renta petrolera, por lo cual se sucedieron diversas alianzas inestables que tendían a excluir a alguno de los sectores en pugna. Luego de treinta años de lucha se alcanza un conjunto de pactos fundacionales y estabilizadores. A partir de ese momento, Venezuela —o al menos sus elites— adopta plenamente el modelo de la modernidad, sin que ello correspondiera a una realidad económica y social coherente con ese modelo. Los actores “toman prestadas” las identidades de los grupos sociales centrales de la sociedad capitalista, pero sin ejercer plenamente sus atribuciones ni asumir todas las responsabilidades que implican (Gómez Calcaño, 1998b: 181-182). El subsidio estatal petrolero deforma la relación entre actores, al encontrar su referencia en el Estado propietario y distribuidor y no en la lucha o conciliación de intereses entre actores complementarios y rivales en el mercado. (Karl, 1997; Coronil, 1997)

A partir de la crisis de los 80 y 90, se creyó que era posible cambiar las máscaras por el rostro real. En la crisis del rentismo petrolero, la sociedad venezolana se encontraba ante un dilema: o trataba de reproducir el rentismo o daba un salto para tratar de hacer corresponder la máscara con la realidad. El ajuste de 1989 significó un intento de sinceración. Pero la mayoría de los actores sociopolíticos y la población en general reaccionaron contra ella, resistiéndose a desprenderse del subsidio de la renta petrolera. Paradójicamente, en la década de los 90, cuando el populismo estaba aparentemente desprestigiado y el consenso de Washington reinaba, la sociedad venezolana pareció orientarse, con Caldera (1994-1999) y Chávez (1999-) hacia nuevas formas de populismo (Gómez Calcaño y Patruyo, 1999; Gómez Calcaño y Arenas, 2002).

Ello se explica en parte porque los procesos anteriores habían creado una altísima exclusión, especialmente a partir de los años ochenta. Dicha fragmentación de la población puso en crisis tanto al Estado como al sistema político y a la sociedad civil, sobre todo porque el modelo de relación entre ellos era fundamentalmente de tipo semi-corporativo, y el estancamiento del modelo de desarrollo rentista hacía inviable la articulación de los sectores excluidos a la sociedad civil por vías tradicionales como el sindicato, el gremio, el empleo público o los subsidios generalizados. A esta sociedad fragmentada se le propuso ir hacia una integración por la vía del mercado y no a través del Estado populista como había venido siendo hasta los 80. Los estallidos de violencia y el desprestigio de los partidos como gestores centrales del modelo alejaron a las elites políticas de la sinceración y las reorientaron hacia los intentos de resurrección del populismo rentista. Por otra parte, las actitudes "antipolíticas" se extendieron en la opinión pública desde la década de los ochenta. (Patruyo, 2005) Ante la creciente decepción ante los partidos, se fue generalizando la necesidad de encontrar sujetos imaginarios alternativos.

Estos sujetos alternativos se construyeron como imágenes invertidas de los actores hegemónicos del momento. Frente al binomio partido-militante, que sometía la carrera política individual a la disciplina en el marco de fuertes estructuras institucionalizadas, se ensalzó la independencia y el antipartidismo; frente a la verticalidad y centralismo de los partidos, se alzaron las banderas de la democratización y la descentralización. En contraposición a las prácticas de pactos y conciliaciones, se valorizó el distanciamiento y hasta enfrentamiento con los actores predominantes.

Finalmente, algunos sectores identificaban a los partidos tradicionales como “populistas” y preferían una redefinición más liberal y tecnocrática del sistema político. La tríada Estado- partido-pueblo, proveniente de la época del populismo temprano, comenzó a ser desafiada por el enfrentamiento entre el Estado y el ciudadano, en el cual el primero debe ser un servidor vigilado y limitado, mientras el partido y el pueblo pasan a ser superfluos: el pueblo, por considerársele una masa uniforme que ignora las diferencias individuales, sectoriales y regionales; y el partido, por su pretensión de representar, con una actitud paternalista, al sujeto indiferenciado "pueblo".

En síntesis, a medida que disminuía el prestigio y la influencia de los partidos, aumentaba la visibilidad de organizaciones cuyos fines primarios eran más bien ciudadanos y sociales que políticos, pero que empezaban a engrosar una creciente “zona gris” entre la identidad social y política de los actores (Gómez Calcaño, 1995). Estas organizaciones se verían arrastradas al centro del huracán al acelerarse los cambios políticos e institucionales. Tal como lo expresaba González de Pacheco (2003^a: 3), después de varios años de turbulencia:

Las OC [Organizaciones de Ciudadanos] extrapolaron a la política su rechazo a los partidos. Desde mediados de los setenta hasta hoy han hecho importantes esfuerzos por diferenciarse en sus prácticas tanto del gobierno como de los partidos políticos, aunque a fin de cuentas comparten con aquellos la ambición de intervenir en los asuntos de interés público. Se podría decir que por muchos años las OC han sido presa de un falso dilema: ser o no ser actores políticos; Esta ambigüedad frente a la política ha condicionado sus actuaciones y afectado sus resultados. A diferencia de lo que sucede en los países desarrollados con democracias consolidadas, donde las organizaciones de la sociedad civil articulan intereses individuales y recurren a los partidos políticos para su intermediación con el Estado, en Venezuela poco a poco se fue construyendo un muro que terminó separando por completo la sociedad civil de la sociedad política.

La legitimidad de la sociedad civil: ¿actores o representantes?

Quizá es precisamente en esta ambigüedad frente a la política que se encuentra una de las claves de la dinámica de la sociedad civil venezolana en la coyuntura reciente. El “muro” que separaba a la sociedad civil de la sociedad política, si bien tenía una gran consistencia en el plano de los discursos, no pudo resistir los dilemas que planteó el proceso de rápido cambio sociopolítico: frente a la ofensiva chavista, dirigida a deslegitimar y hasta destruir a todos los actores que consideraba obstáculos para el proceso revolucionario, los debilitados partidos de oposición y muchas de las inexpertas organizaciones civiles se vieron obligadas a unir fuerzas, incluso en contradicción con la mutua desconfianza y descalificación con las que se trataban en años anteriores. Sin embargo, no por ello dejaron de competir, disputándose la dirección de las luchas, defendiendo espacios para la participación en las decisiones, y presionando para imponer sus respectivas estrategias.

Por su parte, las organizaciones civiles que simpatizaron con el proceso revolucionario también encontraron cada vez más difícil mantener la separación entre el mundo de lo social y el de lo político, entre otros factores porque el movimiento chavista, más que reforzar a las organizaciones preexistentes, se dedicó a crear nuevas formas de organización con apoyo y financiamiento del Estado, con la expectativa de que ellas a su vez se convirtieran en una base de respaldo político al régimen, adicional y paralela a sus propios partidos político-electorales. Aunque este tipo de organización “desde arriba” tiene serios problemas de autenticidad y se caracteriza más por la dirección vertical que por el ejercicio democrático del poder, mientras siga alimentada por los recursos y las preferencias del Estado seguirá ocupando espacios en la frontera de lo social y lo político. Constituye así una variante de la imbricación entre lo social y lo político que se ha observado en la oposición.

Estos dilemas llevan a considerar la hipótesis de que ya no sea posible reconstruir el “muro” que separaba a la sociedad civil de la actividad política, e incluso de una identidad más política que social. Pero ello a su vez lleva a la inevitable pregunta sobre la legitimidad de este cambio, y en particular sobre la *representatividad* como una credencial para legitimar la intervención en la vida pública y la pretensión de influir en las políticas públicas estratégicas.

En efecto, como trasfondo de las luchas y enfrentamientos entre actores, se ha venido planteando el tema de la legitimidad de aquellos que se presentan como “sociedad civil”, “redes sociales organizadas” o simplemente “el pueblo organizado”. Por una parte, algunas corrientes teóricas del primer mundo y de América Latina, basándose sobre todo en la observación de los movimientos anti-globalizadores, dan por supuesta la existencia y legitimidad de una “sociedad civil” que sería una derivación cuasi-natural de los sectores oprimidos por el capital. Esta sociedad civil sería el agente encargado de mantener las luchas de las masas contra el capital que en otros períodos fueron responsabilidad de la clase obrera, y la mayor expresión de este carácter estaría en las numerosas movilizaciones contra la globalización en los últimos años.

Ante lo que se percibe como una complicidad entre los Estados y las grandes corporaciones en la profundización de la lógica neoliberal, y ante el debilitamiento de actores tradicionales como los partidos socialdemócratas y el movimiento sindical, se percibe en la “sociedad civil” un actor ciertamente más complejo y menos reductible a antagonismos simples, pero articulable alrededor de la lucha antiglobalizadora o más bien anticapitalista. Se tiende a atribuir a este conjunto heterogéneo de

actores una común condición de víctimas, ya sea del capital, del patriarcalismo o de diversas formas de racismo y hegemonismo, por lo cual, aunque ya no puedan ser definidos en términos de clase, estarían destinados en última instancia a un enfrentamiento con la lógica del capital. En estas condiciones el problema de la representación legítima de estos actores parece relativamente simple, ya que estaría sobredeterminado por condiciones de existencia que crean “objetivamente” grupos de intereses.³

Mientras en Venezuela no hubo, antes del presente régimen, movimientos antiglobalizadores o anticapitalistas poderosos ni con gran capacidad de movilización, hoy en día estos temas se han incorporado al repertorio de las movilizaciones del gobierno, impulsadas por el discurso presidencial.⁴ Los actores minoritarios preexistentes se han visto, en algunos casos, potenciados, pero en otros, han entrado en conflicto con el gobierno en la medida en que no hay una coincidencia programática total entre la agenda del gobierno y la de las organizaciones. Estas tensiones se han manifestado en particular con organizaciones de derechos humanos, derechos del ambiente e indígenas. (García-Guadilla, 2000)

Paradójicamente, en el caso venezolano vemos una inversión de roles, puesto que los actores que reivindican más activamente la identidad como “sociedad civil” son percibidos como pertenecientes a las clases medias y altas, y se les acusa de tener una concepción “liberal” tanto en sus ideas como en sus formas de actuar, mientras que los que usan el discurso anticapitalista y reivindican su origen popular tienden a rechazar el término o a mirarlo con desconfianza, no tanto por sí mismo, sino por considerar que una fracción privilegiada de la sociedad se ha apropiado de él.

El debate sobre la representatividad de la sociedad civil

Este debate tiene profundas implicaciones para la identidad y legitimidad de los actores que reivindican o, por el contrario, desconfían del término “sociedad civil”. El aura de legitimidad que en el discurso convencional tiene la expresión le otorga un valor político que debe ser explotado o, por el contrario, cuestionado, según se pretenda reivindicar o desprestigiar a un determinado actor. Es quizás por eso que la polémica ha ido más allá de los actores sociales y políticos para insertarse en el campo institucional. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha expresado en varias ocasiones acerca del tema de quiénes son los legítimos representantes de los intereses colectivos y difusos, y en particular qué actores pueden ser reconocidos como parte de la sociedad civil.

En sentencia del 30-6-2000, el Tribunal respondía a un recurso intentado por la Defensoría del Pueblo, la cual alegaba que no se había consultado a la sociedad civil en la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. El Tribunal no le dio la razón, argumentando que algunos de los miembros designados habían sido propuestos por universidades y otras organizaciones sociales. En tal sentido, ofrecía una primera aproximación a su noción de sociedad civil:

Es más, la sociedad civil debe ser representada por instituciones transparentes en cuanto a sus objetivos y su permanencia en el tiempo en relación a esos objetivos, impidiéndose tal representación a grupos advenedizos o a asociaciones o sociedades civiles que esporádicamente vienen a actuar en la vida con fines muy precisos, como los

³ Como lo expresa Vilas (1994): “En la experiencia latinoamericana reciente de la activación de la sociedad civil se destaca, precisamente, su clara articulación con la política y la estructura de clases, aunque de manera compleja y pluridireccional. Clases y ciudadanía, estructura y política, siguen siendo los principios articuladores de la sociedad civil. Es claro que la “activación de la sociedad” se refiere, ante todo, a múltiples formas de organización y movilización del mundo de la pobreza, del trabajo y de la falta de trabajo. Ciertamente las demandas que la sociedad civil plantea no se reducen al terreno de la economía [...] Pero los actores que se movilizan por la democratización, y por impulsar ésta por encima de sus fronteras convencionales de lo público y lo económico -aunque sin dejar de lado lo público y lo económico-, son ante todo los actores del mundo de los pobres y de los oprimidos. (p. 9)

Los blancos de estas movilizaciones son el poder, el Estado, la riqueza, los patrones, los opresores, el racismo institucional, el sesgo masculino en las políticas y en las instituciones, para mencionar sólo algunos. La construcción de la identidad involucra la conciencia de intereses, de problemas, de derechos. Las relaciones tradicionales estrechas del poder y sus agencias con las élites, relaciones exacerbadas en el marco de las recientes políticas neoliberales y el “adelgazamiento” unilateral del Estado, tienen como contrapunto el cuestionamiento de ese poder y de esa alianza por un amplio espectro de grupos e “identidades” en el marco de una clara delimitación popular. (p. 10) Tengo la impresión por lo tanto de que lo que hoy llamamos sociedad civil se parece enormemente a lo que antes llamábamos pueblo.” (p. 11).

⁴ No se niega con esto que existieran sentimientos o actitudes de este tipo, pero ellos se expresaban a través de organizaciones muy minoritarias que tenían poco eco en la opinión pública, o en forma de reacciones espontáneas de resistencia a las medidas de ajuste económico.

electorales, así como a individualidades que se autopostulan, ya que al así hacerlo denotan carecer de respaldo colectivo. Los representantes de la sociedad civil, son asociaciones, grupos e instituciones venezolanas (sin subsidio externo) que por su objeto, permanencia, número de miembros o afiliados y actividad continua, han venido trabajando desde diversos ángulos de esa sociedad, para lograr para ésta una mejor calidad de vida, desligadas del gobierno y de los partidos políticos. (TSJ. N° 356 del 30-6-2000: 15)

Llaman la atención expresiones poco precisas, como "grupos advenedizos", o "individualidades que se autopostulan", que podrían servir para descalificar a determinados actores, pero sobre todo la caracterización de las organizaciones legítimas como aquellas venezolanas, sin subsidio externo. Ello despertó la preocupación de muchas organizaciones, como las de derechos humanos y desarrollo social, que habitualmente reciben fondos del extranjero.

El tribunal precisó más su definición en sentencia N° 1050 del 28-8-2000, en la cual negó a la asociación "Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello" su legitimidad para exigir al Consejo Nacional Electoral información detallada de los resultados de las elecciones del 30 de julio de ese año.

Es deber de esta Sala declarar que carecen de legitimación procesal todas aquellas personas, grupos o entes que fuera del campo de los intereses difusos o colectivos, pretenden representar a la ciudadanía, al pueblo, a la sociedad civil y a otras instituciones semejantes, que no han sido electos por nadie para cumplir tal representación, que se desconoce cuáles son sus intereses, ya que no existe estatuto o ley que las rijan y que no se sabe a cuál comunidad o sociedad representan, si es a la venezolana o a una extranjera cuyas directrices siguen. (TSJ, N° 1050, 23-8-00: 7)

Llama la atención en estos pronunciamientos del Tribunal el énfasis en hacer depender la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil de su carácter representativo, haciendo de la representatividad una condición definitoria sin la cual las organizaciones perderían su derecho a la participación con el fin de promover reivindicaciones legítimas.

De la misma manera, una organización pro-gubernamental, la "Red No Hay Marcha Atrás", expresaba con vehemencia este tipo de concepción de la sociedad civil en tiempos de la designación de los poderes públicos por la Asamblea Nacional en 2002:

Opinan que son "antipopulares los autonombrados como representantes de la sociedad civil", y que se oponen a esa "concepción reduccionista y antidemocrática de la sociedad civil". (...) Apoyan la potestad de la Asamblea Nacional para designar las autoridades de los poderes públicos aún sujetos a régimen de transitoriedad. "La Asamblea Nacional es el dedo legítimo del pueblo. Esto no quiere decir que no hay participación de la sociedad civil en esa elección, sino que no es la sociedad civil de los autonombrados, sino de todas las organizaciones populares que forman parte de ellas", afirman. (Reyes, 2000)

La palabra "autonombrados" —así como la de "autopostulados" usada por el Tribunal Supremo— indica quizá uno de los núcleos de la discusión: ¿quién " nombra " a la sociedad civil? Parece usarse la palabra en el sentido de " nombramiento ", lo que resuena con la tradición estatista venezolana, en la cual la identidad de un actor frecuentemente depende de su " nombramiento " por el Estado como detentor de un cargo o dignidad, y no de su propia iniciativa como organizador de intereses o promotor de proyectos. Para " representar " la sociedad civil, pareciera decirse, es necesario un " nombramiento " legitimador. Ahora bien, una concepción como ésta difiere de la apertura e indeterminación de la sociedad civil, en la cual en principio no hay límites para la creación de organizaciones sociales que reivindiquen los más diversos intereses y programas de acción. Sólo en la medida en que algunas de estas organizaciones entran en compromisos obligatorios para las partes, como la concertación salarial o la política anti-inflacionaria, y en consecuencia se traslada a ellas parte de la autoridad del Estado

(como en las transacciones sociales, la contratación colectiva y pactos tripartitos) sería legítimo establecer jerarquías de representatividad entre organizaciones. Pero si se trata de participar en la esfera pública, incluso con medidas de presión, para influir sobre las decisiones de otros actores, la representatividad no vendría dada por un origen formal electoral sino por la medida en que grupos más o menos amplios de ciudadanos se identifiquen con las proposiciones y acciones de las organizaciones.⁵

Ciertamente, este problema se había planteado en Venezuela desde que la primera Ley Orgánica de Régimen Municipal (1978) había otorgado a las asociaciones de vecinos ciertas prerrogativas de participación, pero a su vez limitaba la competencia por la representatividad, estableciendo una base territorial y poblacional para cada asociación de vecinos (Ramos Rollon, 1995). El reconocimiento formal de las asociaciones las convertía en el primer escalón del sistema semi-corporativo que organizaba las relaciones entre actores sociopolíticos en ese momento histórico (Gómez Calcaño, 1998a).

La cuestión de la representatividad de las organizaciones de la sociedad civil se ha planteado una y otra vez en los últimos años, como consecuencia de los ya mencionados procesos de antipartidismo y antipolítica (no exclusivos de Venezuela). Hasta 1998, la deslegitimación de los partidos no era percibida como alarmante por muchos sectores sociales que no se sentían amenazados por ella, y más bien apostaban a la aparición de *outsiders* tecnocráticos. Sin embargo, la necesidad de resistirse a cambios que veían como amenazas a su estilo de vida encontró a muchos de estos ciudadanos sin actores políticos fuertes a quienes recurrir, ya que la credibilidad y la misma representatividad electoral de esos actores habían sido fuertemente golpeadas. Surgen entonces numerosos grupos de acción, o se politizan otros preexistentes, sin haber resuelto la cuestión de su representatividad, por lo cual deben apoyarse en criterios distintos a la acumulación de votos.

Para orientarnos en este aspecto, nos apoyaremos en algunos aportes conceptuales de Gurza, Houtzager y Castello (2005) quienes, en un estudio sobre organizaciones civiles en Sao Paulo, Brasil, identifican varios criterios según los cuales ellas actúan y se perciben a sí mismas como “representantes” de determinados sectores.⁶ Según estos autores, las organizaciones estudiadas ejercen “actividades de representación” de cuatro tipos: (1) representación ante el poder ejecutivo, visible en la participación en consejos de políticas públicas y/o procesos de presupuesto participativo; (2) mediación directa de demandas frente a organismos públicos específicos (3) patrocinio político por medio de canales electorales tradicionales, como el apoyo a candidatos políticos; (4) patrocinio político por medio del legislativo, como, en el caso de las organizaciones locales, la formulación de demandas al Concejo Municipal. (*Ibid.*:18)

Sin embargo, las actividades mencionadas en sí mismas no garantizan el carácter representativo de los actores que las ejercen, al menos no en el sentido limitado de representación como elección. De hecho, muchas de las organizaciones no pueden alegar este origen, por lo cual se ven obligadas a elaborar argumentos convincentes para justificar su representatividad.⁷

El estudio identifica seis formas de “representación asumida”:

1. *Clásico-electoral*: las organizaciones alegan ser representativas porque realizan elecciones democráticas para la selección de sus líderes; este argumento ocurre con más naturalidad en las organizaciones de segundo grado como federaciones.

⁵ Según Salamanca, la inclusión de la sociedad civil (con atribuciones específicas de participación en muchos campos) en la Constitución de 1999 “puede resultar perjudicial, debido a la reglamentación que se avecina, a objeto de determinar quién forma parte de ella y quién la ‘representa’. (...) Lo que define a la sociedad civil es la participación, no la representación.” (Salamanca, 2003, p. 143)

⁶ Los autores, aunque reconocen los peligros de una democracia “de audiencias” (Manin, 1998) y del surgimiento de liderazgos carismáticos como resultado de la pérdida de representatividad de los partidos, consideran que la apertura de espacios públicos de participación en la formulación de políticas es a la vez producto de la actividad representativa de organizaciones civiles, y oportunidad para la construcción de nuevas formas de representación (*Ibid.*, pp. 6-12)

⁷ “The choice of actors’ self-definition as an analytic point of departure is defensible as long as this self-definition is not conflated with *actual* representation. As civil organisations on a daily basis engage in activities in which political representation is likely to occur, and are faced with the problems of assuming these representational tasks without any models to assert themselves as legitimate representatives, the assumption of representation tends to be formulated and verbalized based on evolving justifications that are not only credible and reasonable but also publicly defensible.” (*Ibid.*, p. 14)

2. *Proximidad*: enfatiza la relación de intimidad, cercanía y horizontalidad con su público, relación confirmada porque su público la busca, la reconoce o confía en ella.
3. *Servicio*: la representatividad se basa en las acciones de la organización para mejorar la calidad de vida, en forma de prestación de servicios sociales o de otro tipo.
4. *Mediación*: la organización es representativa porque su rol como mediador ante otros actores (instituciones gubernamentales, partidos y otros) permite a su público un acceso a centros de poder y decisión que sin ella no tendría.
5. *Membresía*: esta forma de representatividad corresponde a aquella en la que el interés representado es creado por el hecho mismo de la formación del cuerpo representativo, cuyo ejemplo clásico es el sindicalismo. Por basarse en públicos cerrados, es el tipo de representatividad más parecida a la clásica-electoral.
6. *Identidad*: Se refiere a la semejanza de características sustantivas entre representante y representados, tales como género u origen étnico. (*Ibíd.*: 28-31)

Sin pretender extrapolar los resultados precisos del estudio mencionado, creemos que apunta a dos fenómenos importantes: por una parte, la necesidad de ampliar las formas de concebir la representatividad de los actores sociopolíticos, y por la otra, la aparentemente irreversible tendencia a superar las fronteras entre la acción de influencia externa que se atribuye a la sociedad civil y la acción política directa.⁸ En el siguiente análisis de las características y acciones de algunas de las organizaciones más significativas de la sociedad civil venezolana trataremos de explorar en qué formas ellas han enfrentado los dilemas de la participación en política y de su propia representatividad.

Organizaciones territoriales de base

Las organizaciones territoriales de base tienen una larga trayectoria en Venezuela, y han sido estudiadas, al menos desde los años setenta, desde diversos puntos de vista (Geigel, 1979; Hurtado, 1991; Hanes de Acevedo, 1993; Ramos Rollón, 1995; Ellner, 1999; Levine y Romero, 2002)

En el contexto de confrontación de los años recientes, han sido un objeto de disputa por ambos polos de la pugna política, y constituyen uno de los sectores en los que se percibe una mayor división en términos de clases y estratos. Sin embargo, ellas nunca fueron un espacio “neutral” de actividades puramente cívicas, puesto que han expresado en su acción, formas de organización y liderazgos a las corrientes ideológicas que han ocupado el espacio político venezolano en las últimas décadas. De hecho, la disputa por el control de las organizaciones territoriales de base, sobre todo en el sector popular, puede remontarse al menos hasta los inicios del régimen democrático partidario en la década de los sesenta (Ray, 1969). La relación entre organizaciones vecinales populares, el Estado y los partidos políticos ha sido frecuentemente estigmatizada como “clientelismo”, pero esta designación no es suficiente para comprender la ambigüedad de la relación entre patrones y clientes, en la cual, si bien existe subordinación, también hay desde el sector subordinado o “cliente” negociaciones de poder y procesos de aprendizaje de formas de influencia política (protesta, recurso a los medios para ejercer presión, mediación para el acceso del patrón a nuevos clientes, etc.).⁹ La alternancia en el poder de los grandes partidos durante treinta y cinco años se convirtió en un incentivo para evitar lealtades demasiado rígidas hacia uno u otro actor político; y esta tendencia se intensificó con las reformas descentralizadoras que permitieron el surgimiento de actores políticos locales y regionales.

Una imagen superficial de las organizaciones territoriales venezolanas tiende a dividir las en un sector popular controlado por los partidos y otro de clase media autónomo y antipartidista. Sin embargo, esta imagen exagera tendencias que no son tan acentuadas. Organizaciones de sectores

⁸ Para Chalmers (2001) “las organizaciones de la sociedad civil ... se han convertido en parte del escenario político” (p. 63), por lo cual es necesario modificar el marco institucional de las democracias modernas. Para otra concepción de la sociedad civil como ámbito político, véase Ardití (2004). Incluso una defensora de la distinción entre las esferas de la sociedad civil y la sociedad política como Jean Cohen ha admitido recientemente que “...en la nueva sociedad civil global la política de influencia es complementada por la utilización de algunas formas de poder.” (Cohen, 2003, p. 452) (Traducción nuestra)

⁹ Coppedge (1993) ha mostrado, comparando la relación entre partidos y sociedad en México y Venezuela, que en este último país las organizaciones populares de base aprovechaban la competencia entre los partidos principales para aumentar sus logros en el proceso de equipamiento de los barrios y disminuir su dependencia frente a los gobernantes de turno.

medios como FACUR¹⁰ estuvieron sometidas desde sus inicios a pugnas políticas (sobre todo entre AD y COPEI, y más tarde el MAS) que crearon fuertes conflictos y divisiones en su seno (Ramos Rollón, 1995: 98-104; Gómez Calcaño, 1998a; Ellner, 1999). Sea por el temor a ser cooptado por los partidos, sea por la heterogeneidad sociocultural de sus componentes, el movimiento vecinal no ha logrado articularse en organizaciones de nivel nacional, aunque existen algunos casos de federaciones regionales.¹¹

La coyuntura de los últimos años ha alterado significativamente el panorama de las organizaciones territoriales de base, no sólo por la polarización que ha afectado a todos los ámbitos sociales, sino por el surgimiento de nuevas estructuras organizativas, en las cuales se borran los límites entre la acción social y política. Tanto en los sectores populares, donde surgen formas como los círculos bolivarianos, las unidades de batalla electoral (o endógena), las mesas de concertación y otras, fuertemente impulsadas por el Estado,¹² como en los de clase media, en las que, al calor del conflicto político, surgen organizaciones alternativas a las tradicionales, entre las cuales se destacan las llamadas asambleas de ciudadanos.

Estos cambios se ven potenciados por las leyes que crean los Consejos Locales de Planificación¹³ y los Consejos Comunales¹⁴, así como la Ley Orgánica de Régimen Municipal,¹⁵ en la que desaparece la denominación “asociación de vecinos” (la cual, al parecer, sería demasiado reminiscente del régimen anterior) para dar paso a nuevas formas organizativas amplias e imprecisas, que participarían en la vida municipal eligiendo representantes en asambleas ciudadanas.¹⁶

Sin embargo, la institución “Asociación de Vecinos” parece mantener toda su vigencia. En un arqueo de noticias relativas a las comunidades populares en el diario *Últimas Noticias* entre enero de 2005 y junio de 2006, se encontraron 243 referencias a estas organizaciones, las cuales son identificadas tácitamente por los redactores como representantes legítimas de la comunidad y de sus demandas.¹⁷ Estaríamos entonces en presencia de una “representación por mediación”, sin excluir un cierto grado de “representación por proximidad”. Puesto que la gran mayoría de las noticias contienen denuncias muy específicas sobre problemas locales, referidas a servicios públicos, dotación de infraestructura, contaminación, peligros para la salud y similares, la eventual posición política de las asociaciones o sus voceros se obvia; esto permitiría inferir que ha sobrevivido un modelo de demanda, exigencia e incluso de protesta frente a las autoridades locales o las corporaciones responsables de los servicios, que hasta cierto punto trasciende las divisiones políticas ante la necesidad de representar a “toda la comunidad”. Sin embargo, esto no impide que los logros (o fracasos) de los dirigentes vecinales puedan ser a mediano plazo capitalizados en forma de votos para una u otra tendencia política.

Dada la estrecha imbricación entre lo territorial-comunal y lo político que caracteriza a las nuevas organizaciones, orientadas tanto al gobierno como a la oposición, incluiremos a sus principales expresiones, los círculos bolivarianos por una parte y las asambleas de ciudadanos por la otra, en la categoría de organizaciones cívico-políticas.

¹⁰ Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas, constituida en 1971 por asociaciones vecinales de clase media de Caracas.

¹¹ La misma FACUR tuvo su última presencia pública con la participación de la presidenta de la organización en el “Congresillo”, cuerpo legislativo (no electo sino cooptado) que sucedió a la Asamblea Constituyente, y la de un representante en el comité de postulaciones que contribuyó a designar el Consejo Nacional Electoral en 2000. Desde ese momento, prácticamente ha desaparecido del espacio público.

¹² Cariola y Lacabana (2005) detectan nuevas formas de participación popular en la periferia metropolitana de Caracas, como las mesas técnicas de agua, los comités de tierras urbanas, los comités de salud y otras relacionadas con la economía social. Encuentran que estas formas de organización han contribuido a la revalorización del espacio público, el fortalecimiento de los tejidos sociales comunitarios, el afianzamiento de la identidad social y territorial, y el desarrollo de la ciudadanía. Por otra parte constatan limitaciones como la persistencia de una cultura de la urgencia, de visiones individualistas, de la concepción paternalista del Estado, y de liderazgos concentradores de poder y representación.

¹³ Sancionada el 16/5/2002. Puede consultarse en: <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=219>

¹⁴ Sancionada el 6/4/2006. Puede consultarse en: <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=735>

¹⁵ Sancionada el 17/05/2005. Puede consultarse en: <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=333>

¹⁶ Esta desaparición provocó una polémica entre dirigentes sociales, en la que algunos temían la pérdida de una instancia de representación conquistada en las luchas vecinales de las décadas anteriores, mientras otros destacaban la mayor flexibilidad y apertura a diversas opciones de organización, frente a lo que consideraban la cooptación de las asociaciones por los partidos políticos (Reyes, 2005).

¹⁷ De los diarios que circulan en Caracas, este es el más leído en los sectores populares y el que dedica más espacio al reportaje social.

Organizaciones cívico-políticas

El campo de las organizaciones cívico-políticas es particularmente complejo, por la diversidad de actores que la forman: en efecto conviven en ella algunas de larga tradición, como las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con otras surgidas al calor de las luchas sociales y políticas de la coyuntura. Por otra parte, este campo es ocupado también por organizaciones cuya identidad original estaba en el campo comunitario, vecinal, educativo o social, pero que han desbordado hacia la acción política en la medida en que se han sentido amenazadas por los cambios o, por el contrario, han querido contribuir a ellos. Estudiaremos, en particular, algunas organizaciones que, independientemente de su origen, han participado activamente en el proceso sociopolítico reciente y han contribuido a su conformación. Entre ellas se encuentra SINERGIA, cuya identidad central es la de servicio social, pero que jugó un importante papel en el proceso constituyente. Otra organización que ha jugado un papel central, y muy ligado a la coyuntura, es SUMATE, cuyo foco de acción es lo electoral. Aunque estas organizaciones han hecho esfuerzos, en determinados momentos, por mantenerse en un lugar intermedio en la disputa política, la dinámica de sus acciones y las reacciones del Estado frente a ellas han terminado por ubicarlas en el campo opositor (aunque no por ello ligadas a la estrategia u organización de determinados partidos políticos). Por otra parte, algunas organizaciones preexistentes se han identificado con la orientación general del gobierno, pero éste a su vez ha emprendido diversas estrategias para organizar a la población desde el Estado, con el fin de reforzar la identificación entre gobierno y pueblo. Entre ellas, las más conocidas son los “círculos bolivarianos”, pero también deben ser tomadas en cuenta otras organizaciones, especialmente locales, que tratan de establecer redes articuladoras de lo social y lo político alrededor de la lealtad al “proceso” o, más recientemente, al “socialismo del siglo XXI”

Organizaciones sociales y proceso constituyente¹⁸

La reflexión de los actores sobre la creciente pérdida de legitimidad del sistema político durante los noventa dio lugar a corrientes reformistas que pretendían situarse en un lugar intermedio entre el inmovilismo de los partidos tradicionales y la descalificación del sistema como “pseudodemocracia”. Estas corrientes pretendían refundar el sistema político por medio de cambios profundos en la Constitución y de la redefinición de los pactos constitutivos, para incluir nuevos actores, impulsar la descentralización y combatir la corrupción y la exclusión. Una de las consecuencias de esta actitud fue la conformación en 1997 de SINERGIA, asociación de segundo grado, formada por las organizaciones privadas de desarrollo social más importantes del país.¹⁹ Esta federación intenta coordinar y potenciar la capacidad de cambio de las organizaciones individuales al institucionalizar lo que hasta ese momento eran redes informales de cooperación.²⁰

La convocatoria a una Asamblea Constituyente a principios de 1999 presentó nuevas oportunidades y desafíos. Hasta ese momento, la participación de organizaciones sociales en el proceso constituyente se había venido planteando ante todo en términos de aportes externos, de contribuciones a los debates por la vía de la presentación de propuestas, su difusión en los medios y el ejercicio de mecanismos de presión y persuasión. Sin embargo, ya a fines de diciembre de 1998 se comenzó a considerar, en diversos grupos, la posibilidad de incorporarse directamente a la Asamblea, lo que implicaba resolver algunos problemas de identidad y representatividad que seguirían acosando a las organizaciones civiles hasta el presente. En efecto, la participación directa en la Constituyente planteaba, en primer lugar, el problema del rol de las asociaciones civiles, hasta ese momento orientado hacia el logro de influencia sobre los actores decisivos más que de acceso al poder. La postulación de candidatos por las organizaciones podía ser percibida como una desviación respecto a los fines sociales de las mismas.

¹⁸ Esta sección se apoya parcialmente en Gómez Calcaño (2000)

¹⁹ Actualmente, SINERGIA agrupa cuarenta organizaciones, entre las que se destaca el CESAP, Centro al servicio de la Acción Popular, ONG de larga trayectoria en proyectos de desarrollo social; La Federación de Asociaciones de Protección al Niño, Joven y la Familia (FIPAN), que a su vez agrupa 72 organizaciones; numerosas fundaciones ligadas a la empresa privada y organizaciones de promoción de la salud. Información detallada sobre los principios, objetivos, composición y actividades de esta organización puede encontrarse en su sitio web: www.sinergia.org.ve

²⁰ Sobre las relaciones entre SINERGIA y otras organizaciones afines, véase García Guadilla y Silva Querales, (1999, pp. 18-20)

Por otra parte, se planteaba el problema de la representatividad de los candidatos. ¿Cuál era la definición correcta de un "candidato de la sociedad civil"? ¿Significaba esto una persona postulada por una organización para representar sus intereses específicos? ¿O una persona que representaba el programa de una coalición, de mayor o menor amplitud, de organizaciones afines? Aquí se planteaba otro problema de fondo, puesto que su representatividad se basaba claramente en su capacidad de brindar servicios sociales a públicos claramente definidos.

En tercer lugar se planteaba el problema de los recursos. ¿Era legítimo dedicar fondos de las organizaciones sociales a actividades de apoyo electoral? Aunque obviamente no se planteaba desviar recursos de programas sociales o comunitarios a campañas electorales, los candidatos avalados por la "sociedad civil" iban a necesitar apoyo material, y si se les estaba respaldando no podían ser abandonados a su suerte. El dilema entre participar directamente o como agentes externos no tuvo una solución única, e incluso la falta de una definición clara sobre este punto pudo haber contribuido a la proliferación de candidatos por iniciativa propia que pretendían arrojarse con el manto de legitimidad de la "sociedad civil", mientras que los pocos candidatos que efectivamente habían solicitado y obtenido el respaldo de organizaciones no lograrían diferenciar su mensaje entre la multiplicidad de voces que se lanzaron a buscar el voto popular. Aunque el debate y sus consecuencias se intensificaron a partir de la convocatoria a la elección de la Constituyente, ya desde diciembre de 1998 se avizoraban los dilemas por venir.

SINERGIA decidió en ese momento que iba a respaldar candidatos a la Asamblea Constituyente, con el criterio de impulsar algunos puntos programáticos centrales compartidos por las organizaciones que la conforman. Las características de los candidatos y las ideas a impulsar eran expresadas así por el Presidente de la organización, Armando Janssens:

...Sinergia, iniciará una consulta entre sus miembros a objeto de proponer nombres que, "según un criterio de integridad y largos caminos hechos", puedan ser considerados como representantes del sector civil a la Asamblea Constituyente. (Duarte, 1998)

La idea de presentar candidatos que pudieran "ser considerados como representantes del sector civil" podría interpretarse como una suerte de representación corporativa, ya que los eventuales electos no serían exactamente representantes de sus electores como ciudadanos individuales, sino de sus postulantes, en la medida en que éstos pretendían otorgar a sus candidatos un respaldo institucionalizado. De una sociedad civil "representativa" por su trayectoria de acción social y cercanía con los ciudadanos, se pasaría así a una sociedad civil "representada" en la Asamblea Constituyente por la vía del voto.

Reconociendo el carácter sorprendente de la decisión, puesto que normalmente dichas organizaciones se habían mantenido al margen de los procesos electorales, se trató de explicar y justificar sus razones:

"Por razones estatutarias, Sinergia está impedida de postular candidatos, por lo cual se utilizarán como plataformas de lanzamiento cuatro de las ONG que la integran: Foro Constitucional, Primero Justicia²¹, Poder Ciudadano y Laicos Comprometidos. (...)

Todos los candidatos, explicó Janssens, han de cumplir con tres requisitos básicos: 1) Estar vinculados al hecho social organizado, "pues no queremos solitarios sino a quienes han aprendido a trabajar en equipo en una permanente búsqueda de soluciones"; 2) Capacidad intelectual y moral, "lo cual incluye disposición al diálogo constructivo"; y 3) Haber suscrito los principios fundamentales que orientan la acción de la sociedad civil organizada, "principios que ponen al descubierto el terremoto que vive el país, la ineficiencia de la política tradicional y la necesidad de cambios profundos.

²¹ Para ese momento, Primero Justicia todavía no había dado el paso de convertirse en partido.

Si bien lo económico es importante, la discusión política que se desarrollará en la Constituyente es fundamental", comentó Janssens.

El sacerdote anunció que, además, los representantes de la sociedad civil organizada que sean electos deben comprometerse a mantener una comunicación permanente con los llamados "voceros constituyentes". Janssens explicó que a través de esta nueva figura se tratará de impedir que los miembros de la Asamblea se olviden de las necesidades fundamentales del pueblo y se pierdan en discusiones abstractas.

"No permitiremos que la vieja política, la cual ya se está infiltrando en la nueva política que se fundamenta en la reivindicación de la participación de todos, nos aplaste. A partir de este momento, uniremos esfuerzos para un nuevo país, un país que sintamos como verdaderamente nuestro", expresó Janssens. (...)

Humberto Bauder, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, refirió una de las ventajas comparativas que exhibirían los representantes de la sociedad civil organizada sobre los representantes de los partidos políticos: "Nuestro aval consiste en el trabajo que hemos desarrollado en beneficio de las comunidades a las cuales pertenecemos. No nos amarra disciplina alguna, según la cual estemos obligados a levantar la mano o no para aprobar o desaprobar una decisión, cuando un jefe de fracción así lo indique". (...)

Leopoldo López, candidato de Primero Justicia, refirió que quienes compitan en circunscripción nacional deben recoger 20 mil firmas y, en vista de que el tiempo apremia, ello significa unas 760 firmas al día. López propuso que, al igual que los partidos políticos, la sociedad civil organizada tenga una representación en el CNE que pueda incidir sobre el curso del proceso constituyente. (López, 1999)

Puede leerse entre las líneas del discurso de las asociaciones una autopercepción como actores no sólo distintos, sino superiores, a los despreciados partidos políticos: los "representantes de la sociedad civil" trabajarán en equipo, tendrán alta capacidad intelectual y moral, se orientarán por los principios de la sociedad civil y no los de la política tradicional, mantendrán el contacto con los electores, no estarán sujetos a la disciplina partidista, y son tan legítimos como actores políticos que deben estar representados ante el árbitro electoral.

Paradójicamente, algunas de las organizaciones que durante muchos años habían reivindicado la especificidad de su misión y la necesidad de deslindar los campos entre la participación social y el activismo político parecieron verse arrastradas por la tormenta constituyente, o más bien revolucionaria. La difuminación de roles e identidades de la actual etapa de la vida política venezolana, en la cual el estamento militar se convierte en actor político abierto, los partidos organizados pierden su representatividad y las instituciones dejan de regular la convivencia social, terminó por afectar la conciencia de los límites hasta en estos actores. No se pretende con esto formular un juicio moral sobre ellos: considerando el contexto de desinstitucionalización generalizada y la carencia de actores políticos legítimos, esta difuminación de roles puede haber sido inevitable, y no todos sus efectos tienen por qué haber sido negativos. Como mínimo, la experiencia de haber "trasgredido" los límites de lo social para enfrentar las realidades de la política en una época particularmente difícil parece haber dejado importantes aprendizajes a algunos de los actores.

En todo caso, los dilemas y promesas de la participación en la Asamblea como representantes del pueblo permanecieron en el plano teórico, puesto que los candidatos "de la sociedad civil", tanto los apoyados por SINERGIA como los propuestos por las más diversas organizaciones, fracasaron en sus intentos por ser elegidos a la Asamblea, a causa sobre todo de la alta concentración del voto pro Chávez y la dispersión de los candidatos "independientes" o de la "sociedad civil".²² La ilusión, impulsada por el antipartidismo, según la cual los ciudadanos preferirían a sus "representantes naturales" y no a los portadores de proyectos políticos nacionales, y el mito del voto nominal como mecanismo para acercar el elegido al elector se enfrentaron con una situación política que los desbordaba. Esto impulsaría a muchas organizaciones de la sociedad civil, no a apartarse del campo de la política, sino a buscar su representatividad fuera del ámbito electoral.

²² García-Guadilla y Hurtado (2000, pp. 20-21) muestran que el gobierno presentó 124 candidatos para 128 escaños, mientras que el resto de los actores presentó 1047, y no logró concertar alianzas.

El proceso mismo de elaboración de la Constitución de 1999 previó diversos mecanismos para la recepción de proposiciones desde la sociedad civil. Algunas comisiones, como la de Desarrollo Social, hicieron consultas amplias y sistemáticas; otras las hicieron parciales y apresuradas; pero en general se produjo una alta movilización de organizaciones que formularon proposiciones, sea en términos generales, sea como mecanismo de defensa y promoción de intereses sectoriales o grupales.²³ Una de las que tuvo mayor éxito relativo fue la coalición de Derechos Humanos denominada “Foro por la Vida”, formada por las organizaciones de mayor trayectoria en ese campo. (González de Pacheco, 2003: 8-11) Sin embargo, la aceleración que se imprimió al proceso desde el mes de octubre de 1999, a instancias del propio presidente Chávez, perjudicó la posibilidad de un debate social más amplio. En síntesis, esta primera fase del proceso de implantación de una nueva estructura institucional se vio acompañada de una considerable activación de la sociedad civil, y de una participación relativamente amplia en la deliberación, aunque mucho más restringida en cuanto a poder de decisión.²⁴

¿Una “sociedad civil” oficialista?²⁵

La larga tradición venezolana de promover organizaciones de base desde el Estado ha encontrado continuidad en el actual gobierno. Dado el origen carismático y personalista del liderazgo de Chávez, su movimiento llegó al poder con una gran fuerza emocional e identificación simbólica, pero con bases organizativas extremadamente frágiles. El Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR-200, actor central de la conspiración golpista, por su misma función se reducía a una vanguardia que debió adaptarse rápidamente a la vida pública a partir de 1994; el vehículo electoral denominado MVR apenas tuvo tiempo de conformarse cuando se produjo el salto al poder. Si bien numerosas organizaciones sociales de base simpatizaban con el nuevo gobierno, no existía una red organizada que pudiera coordinar esas fuerzas con suficiente efectividad política para sustituir a las organizaciones tradicionales, fuertemente influidas por los valores predominantes en el modelo de democracia “puntofijista”. De hecho, desde los inicios del gobierno algunos de los políticos oficialistas pretendían crear nuevas organizaciones, desconociendo el proceso de autoorganización de comunidades urbanas que se remonta a muchas décadas, y se creían en el deber de organizar a la “sociedad civil”.²⁶

En una polémica sobre el tema, producida en año 2000, el Presidente Chávez expuso su concepción de la sociedad civil: “La sociedad civil, en su mayoría, repito, es revolucionaria, y están impulsando este proceso.” (Chávez, 2000). Ello se manifestaba en los resultados electorales:

... la sociedad civil, ya lo he dicho, se ha pronunciado aquí en siete repetidas cargas de caballería: 8 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de abril, 25 de julio, 15 de diciembre, seis veces y 30 de julio. ¿Quién votó aquí? ¿Qué sociedad votó? ¿No fue la sociedad civil? ¿De dónde salieron los casi cuatro millones de votos y como veinte millones si sumamos todo, indicando el camino? (Id.)

Este pasaje muestra claramente que para Chávez, la idea de "sociedad civil" se identifica con la sociedad como un todo, o como el conjunto de los ciudadanos. Curiosamente, a pesar del énfasis de la

²³ García-Guadilla (2002, pp. 262-263) indica, basándose en el estudio de uno de los mecanismos de articulación más exitosos del período, las llamadas “Mesas de Participación” promovidas por SINERGIA, que participaron 209 organizaciones con 624 propuestas. Aunque no todas las organizaciones tuvieron éxito en hacer incluir sus propuestas en la nueva Constitución, el balance fue de más de 50 % de incorporación, sea textual o con leves modificaciones.

²⁴ En contraste con García Guadilla, González de Pacheco evalúa en forma más pesimista el resultado de la Constituyente: “Constituye quizás el episodio más decepcionante para las OC [organizaciones de ciudadanos] en este período. [...] ...aunque varias propuestas de las OC fueron incorporadas al texto constitucional, el proceso no llenó las expectativas por varias razones: la inequidad en el acceso a las distintas comisiones de la ANC..., el plazo que se estableció para cumplir con todas las actividades y particularmente el ‘acelerador’ que se impuso en la fase final, la ausencia de una visión integral del texto constitucional y la imposición de ciertos planteamientos tales como: la duración del mandato presidencial, la posibilidad de reelección y la exacerbación del presidencialismo”. (González de Pacheco, 2002, p. 8)

²⁵ Esta sección se apoya parcialmente en Arenas y Gómez (2004)

²⁶ Por ejemplo, el concejal y vicepresidente del Cabildo Metropolitano, Edgar Gaviria, afirmaba en octubre de 2001: “Estamos en una etapa de formación, pero la meta es establecer a las redes sociales (de seguridad, salud, educación, etc.) en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Se trata de *eliminar las asociaciones de vecinos* y reemplazarlas por los promotores comunitarios de los distintos barrios, que a su vez conforman las redes sociales.” (Aique, 2001) (Énfasis nuestro). Aunque esta meta podría parecer irreal en aquel momento, la eliminación de la figura de las asociaciones en las leyes sobre consejos locales de planificación y sobre régimen municipal en 2003 y 2005 indican una notable coherencia en los propósitos del gobierno.

Constitución de 1999 en evitar el término "democracia representativa" y en destacar el carácter participativo y protagónico de la misma, recurre al argumento de la representatividad otorgada por el voto para demostrar el apoyo de la "sociedad civil" a su proyecto. Sin embargo, otras acciones y discursos del mismo gobierno y de sus partidarios muestran que ellos estaban conscientes desde el principio de la necesidad de convertir el apoyo puntual y difuso de los electores en organizaciones permanentes, capaces de movilizarse para consolidar dicho apoyo.

El carácter unipersonal del gobierno intensificó los problemas tradicionales del clientelismo político, ya que las demandas alcanzaron un alto nivel de concentración.: la vieja costumbre de entregar al Jefe de Estado cartas o, al menos, "papelitos" con solicitudes directas y personales de ayuda para necesidades o carencias muy concretas de salud, empleo, dinero o vivienda, creció hasta el punto que el Presidente debió encargarse a varios de sus acompañantes el recibir y tramitar las peticiones. La carencia de organizaciones de base organizadas en sólidas redes era reconocida por dirigentes del régimen.²⁷

Ello puede dar una clave para comprender la importancia otorgada por el proyecto a la creación de una red de organizaciones de base; ellas tienen antecedentes en los "círculos patrióticos" que ya aparecían en el discurso de Chávez antes de llegar al poder; pero luego han ido adoptando diversos nombres a medida que se desarrolla el proyecto. Los que concentraron la atención en los primeros años de gobierno fueron los llamados "círculos bolivarianos", más adelante sustituidos por las "unidades de batalla electoral", que constituyeron el motor de la movilización de los partidarios del gobierno frente al referéndum revocatorio de 2004. Cumplida esta coyuntura, cambiaron su nombre a "unidades de batalla endógena", por referencia al "modelo de desarrollo endógeno" que pretende impulsar el gobierno. Independientemente de las diferentes denominaciones, todas estas organizaciones tienen algunos rasgos en común. Su meta pareciera ser crear el pueblo organizado e "ideologizado" que canalice las demandas y llene el espacio que normalmente ocupa la sociedad civil. El entonces Ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República, Diosdado Cabello, afirmaba que la organización de los círculos no era partidista: "sencillamente es la sociedad civil organizada" (El Mundo, 12-06-2001)

En los años transcurridos desde su creación ha disminuido la importancia de los círculos, ya que ellos no parecen disfrutar del monopolio de la organización legítima del movimiento chavista y deben competir con una multiplicidad de organizaciones de base que surgen o desaparecen según las coyunturas políticas. Por otra parte, tal como ha ocurrido con muchas organizaciones de la sociedad civil "opositora", se han difuminado los límites entre el carácter social y político de los círculos, ya que ellos en determinadas ocasiones aparecen como parte integrante del partido MVR, y otras como una esfera organizativa diferente con su propia dirección.. Su última actividad pública de importancia fue la celebración de un Congreso Programático en diciembre de 2003. Aparentemente, los resultados del Congreso fueron modestos: uno de sus dirigentes destacaba la intención de defender el programa Barrio Adentro²⁸ frente a las resistencias que se le habrían presentado, así como de instalar "Casas Bolivarianas del Poder Popular". El vocero también se preocupó por responder la acusación a los círculos de ser una copia de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos²⁹. A pesar de haber contado con la presencia del presidente Chávez en el congreso, los círculos bolivarianos, al menos en su dimensión de organización nacional, pronto entrarían en una seria crisis interna y, ante la necesidad de movilización electoral producida por la convocatoria al referéndum revocatorio en mayo de 2004, se verían sumergidos por otras organizaciones como las Unidades de Batalla Electoral, las patrullas electorales y el mismo partido MVR.

²⁷ Así lo expresaba Guillermo García Ponce: "Yo diría que la falla fundamental es la falta de organización del pueblo, de su participación organizada en la gestión de gobierno y las debilidades en cuanto a la formación política e ideológica de quienes concurren en este proceso. [...] Hasta ahora el proceso se desarrolla apoyándose en las Fuerzas Armadas, en el carácter carismático del Presidente y su gran poder de convocatoria; apoyándose en una exigencia nacional de cambio, pero le falta el pueblo organizado, unido y consciente." (*El Mundo*, Caracas, 30-7-2001)

²⁸ Programa de atención médica primaria y de proximidad en los barrios populares, atendido por médicos cubanos, iniciado a fines de 2003.

²⁹ "Los CDR son más políticos y los CB son más sociales. Más allá de la necesidad de reforzar la labor de los Círculos con Barrio Adentro no hay nada, porque nuestra relación con los CDR cubanos es sólo esa. Nosotros somos bolivarianos, no somos comunistas", señaló Enrique Ochoa de los Círculos Bolivarianos de Portuguesa." (Angarita,2003).

Las cifras acerca del número de círculos y de sus componentes son variables y poco confiables, ya que están inmersas en la disputa por el control de los mismos entre varias tendencias.³⁰ Según uno de los ex coordinadores nacionales, Ulises Castro, existían 200000 círculos en 2004. Pero otro afirma que “nunca existieron mecanismos para determinar con exactitud la cantidad de CB y el número de sus integrantes.” (Botía, 2005a) . El líder de un grupo disidente, la Red Nacional de Círculos Bolivarianos, afirma que esta red comprende más de 120000 círculos.³¹ Y desde la oficina coordinadora de los Círculos en el palacio presidencial de Miraflores se afirma que existen más de 300000 círculos, todos ellos operativos. Finalmente, el testimonio de un dirigente local afirmaba:

Pero la realidad indica que, en el ámbito político, los CB fueron reemplazados por las UBE, afirma Fernando Carvajal, miembro del Comando Maisanta en el 23 de Enero, quien se pregunta cuál es su rol, y asegura que “se crearon expectativas en torno a una figura que luego fue abandonada”. (*Idem*)

Aunque en el momento actual los círculos mantienen un bajo perfil, su identidad parece definirse cada vez más como una organización política, en tanto presentaron candidatos a las elecciones legislativas de diciembre de 2005, en alianza con el Partido Comunista de Venezuela, y plantean la consolidación de esa alianza. (“PCV y Círculos Bolivarianos impulsan alianza de izquierda”, *El Universal.com*, 3-06-2006)

La debilidad y conflictos internos de los círculos en 2004 permiten explicar el por qué el chavismo debió recurrir a una nueva forma organizativa, las unidades de batalla electoral, complementadas por las patrullas electorales, para enfrentar el referéndum revocatorio.³² En un rápido movimiento, el Comando Maisanta se propuso crear 8500 UBE y 130000 patrullas electorales, para movilizar 1300000 militantes (Botía, 2004). Aunque no hay una confirmación independiente de esas cifras, la capacidad de la movilización de las UBE y patrullas fue evidente el día del referéndum, y puede haber contribuido a hacer más creíble la victoria de Chávez en el mismo, más allá de las dudas y protestas de la oposición.

En octubre de 2004, el Presidente anunció la transformación de las UBE en “Unidades de Batalla Endógena”³³ (Chávez, 2004a). El sentido de este cambio era el de integrar a los grupos organizados en estructuras más permanentes de carácter productivo, que pudieran contribuir a absorber el desempleo y crear las bases de la economía social; de allí surge un nuevo impulso a la creación de cooperativas, con promesas de financiamiento público. Sin embargo, no parece haber una coordinación clara entre uno y otro proceso.³⁴

³⁰ Sobre las disputas internas por el control de los círculos, véase Botía (2005b)

³¹ Este grupo se fusionó en junio de 2005 con el Frente Nacional de Círculos Bolivarianos, con el fin de relanzar y fortalecer a esas organizaciones. Su coordinador, Alfredo Martínez “informó que dentro de la organización han conformado una Red de Inteligencia con el fin de evaluar y detectar posibles planes o acciones que vayan en contra de la integridad física del Presidente de la República Hugo Chávez. ‘Tenemos una red social de inteligencia conformada en todo el ámbito nacional que nos permite obtener respuesta inmediata de todas estas informaciones que se filtran y de las personas que están conspirando’, aseguró. Agregó que estas redes de inteligencia han tenido éxito en lo que respecta a la creación de las Contralorías Sociales para hacerle seguimiento a los planes y proyectos que ha ordenado el Primer Mandatario Nacional y para combatir la corrupción.” (“Círculos Bolivarianos unifican criterios”, 2005)

³² Así se definió la estructura de la campaña: “...el comando trabajará desde abajo con las unidades de batalla electorales, conformadas por una persona por cada centro de votación, y que tienen la misión de garantizar el trabajo para el éxito y evitar que la oposición intente cometer fraude. Alrededor de estas unidades de batalla estarán las patrullas electorales, conformadas por 10 personas de la localidad circundante al centro de votación, quienes brindarán todo tipo de apoyo a los votantes y desarrollarán los aspectos logísticos para que éstos puedan ejercer su derecho al sufragio. Desde ahora hasta el 15 de agosto tendrán la misión de incentivar a las personas para que acudan a votar el día de la consulta electoral y solventar todos los problemas de registro en el CNE, de cédula de identidad que puedan tener los simpatizantes del presidente de la República.” (Carrillo, 2004)

³³ Esta transformación fue ratificada pocos días después:

“...el trabajo de la participación popular, la participación colectiva es fundamental para la revolución, los comités de tierra urbana, los comités de salud, las mesas técnicas del agua, todas esas organizaciones, las patrullas deben seguir trabajando más allá de las elecciones, como ya lo he dicho, las Unidades de Batalla Electoral, después que pasen las elecciones las vamos a llamar Unidades de Batalla Endógena, las UBE, Unidades de Batalla Endógena, para que se inserten en la lucha, palmo a palmo del territorio, casa a casa, esquina a esquina, trabajando muy duro, los próximos meses, los próximos años, para mirarlo en el corto plazo, así lo he dicho y lo digo 2 años, 2005-2006 vamos hacer el esfuerzo que podamos para dar ese salto adelante, un salto adelante para que la revolución coja camino hacia el futuro de manera irreversible y triunfante siempre.” (Chávez, 2004b)

³⁴ “Si bien durante todo el 2004 se crearon 42.097 cooperativas (13mil de ellas entre noviembre y diciembre) y aunque hasta febrero de 2005 iban ya constituidas 4.000 más, no existe evidencia de que este crecimiento sea resultado de la conversión de UBE’s o patrullas en empresas solidarias, afirma el superintendente nacional de cooperativas, Carlos Molina. La Sunacoop contabiliza también

En un estudio basado en encuestas, Hawkins y Hansens (2006) afirman que los Círculos Bolivarianos no corresponden a ninguno de los estereotipos con los que se les ha señalado:

Our most important finding is that respondents did not conform to either of the two stereotypes of the Círculos. On the one hand, our respondents generally did not advocate violence, they had a high level of democratic values, and they were involved in a variety of significant efforts to reach into Venezuela shantytowns with government programs and principles of democratic organization; thus, the opposition's fears about the Círculos were probably exaggerated. On the other hand, our respondents also failed to support the idealistic view that the Círculos heralded a new form of participatory democracy. The Círculos we studied lacked one of the most fundamental attributes of a civil society capable of sustaining participatory democracy: autonomy from the state. (Hawkins y Hansens, 2006: 104)

Evidentemente, el mundo de las organizaciones progubernamentales no se agota en los Círculos y las UBE. Uno de los campos en los cuales el oficialismo ha encontrado dificultades es el sector juvenil y especialmente en los gremios estudiantiles. La primera organización progubernamental de este sector fue la fundación *Juventud y Cambio*,³⁵ que dio lugar a la creación del Instituto Nacional de la Juventud pero fue disuelta al crearse éste. Una segunda modalidad ha sido la Federación Bolivariana de Estudiantes, constituida en julio de 2002, que se ha propuesto, entre otras metas, obtener la representación estudiantil en las universidades más importantes, hasta ahora con pocos éxitos en su haber y una escasa presencia pública. Un tercer intento ha sido el Frente Francisco de Miranda (FFM), iniciado en 2003 como una forma de preparar facilitadores para la Misión Robinson (programa alfabetizador del gobierno). Con este fin se envió a aproximadamente 36000 jóvenes a estudiar cursos de trabajo social de 50 días en Cuba (Janicke, 2005). Según voceros de la organización, ella opera con una estructura de tipo militar, la directiva es seleccionada a través de la oficina presidencial y la dirección política proviene de Chávez (*Idem*). A pesar de sus aportes a los programas sociales, la organización ha vivido momentos de crisis, debidos a la pérdida de incentivos económicos y a los debates acerca de su identidad social o política.³⁶

Basándose en una amplia investigación sobre el terreno, Rondón (2004) distingue tres tipos de organizaciones en el campo chavista: el primero incluye algunas preexistentes, como ciertas organizaciones indígenas, asambleas de barrios y grupos evangélicos, y el grupo armado (antes clandestino) conocido como "Tupamaros", arraigado en la urbanización popular "23 de Enero" de Caracas. El segundo corresponde a las organizaciones creadas o promovidas por el gobierno, que incluye los círculos bolivarianos, Clase Media en Positivo, nuevas cooperativas y asociaciones empresariales y organizaciones consultoras para las misiones. Y el tercero abarca organizaciones que se acercaron a las posiciones del gobierno después del golpe de abril de 2002, y que ocasionalmente adoptan posiciones moderadas o no alineadas. (Rondón, 2004: 57)

Al analizar los aportes de los actores sociopolíticos a la democracia y la paz o, por el contrario, a la exclusión y el conflicto entre 2002 y 2003, el mismo autor otorga a las organizaciones chavistas un balance entre unos y otros:

alrededor de 5.000 cooperativas de la Misión Vuelvan Caras, pero al igual que en el caso anterior, éstas no tienen relación con una transformación de UBE's y patrullas. Varios veteranos de la Batalla de Santa Inés (ver testimonios) convalidan la percepción de que las patrullas, en términos generales, fueron desactivadas hace ya tiempo." (...) "Al igual que en el caso de los Círculos Bolivarianos (CB), el total de patrullas y las UBE's que el gobierno dijo haber logrado crear (28 mil y 650 mil, respectivamente), no se corresponden con el número de Comités de Tierra Urbanos, CTU, que existen: aproximadamente 4.000, según el cálculo de sus integrantes, ni de Comités de Salud (CS) organizados por las comunidades para fiscalizar el programa Barrio Adentro. Según el Ministerio de Salud, hay alrededor de 5.000 CS." (Botía, 2005c)

35 Que poco después cambió su nombre a "Patria Joven" e intervino en la "toma" (ocupación) del rectorado de la Universidad Central de Venezuela durante 34 días, pretendiendo imponer una Asamblea Constituyente Universitaria, en lo cual fracasó. (García-Guadilla, 2003, p. 250)

36 "While the FFM represents the most successful attempt at involving large numbers of youth in the revolutionary process, in November 2004, according to Rosa, the FFM found itself in a 'state of ideological and organizational emergency.'

Initially, members of the FFM were paid a stipend by the government; however at this time their funding was reduced and 21,000 of the original 36,000 participants in the social activism course left the organization, many for economic reasons, but also because of ideological heterogeneity (the FFM even has Mormons among its membership), and disagreements over lack of internal democracy and functioning. Rosa added, "There were young people in the Frente who put forward the position that they didn't go to Cuba to be political, but rather to do social work', however, 'through a process of discussion we decided that we were a political/social organisation that responded to the line of Commandante Chavez, that responded to the interests of the revolution.'" (Janicke, 2005)

Los que contribuyeron a la democracia y la paz fueron: 1) la promoción de la Constitución de 1999 a través de la educación; 2) el establecimiento de foros abiertos y redes entre organizaciones de diverso origen; 3) la promoción de mecanismos legales para la regularización de la propiedad en los barrios populares; 4) la promoción de manifestaciones pacíficas a favor del gobierno; 5) la promoción de la solidaridad entre las clases media y popular; 6) la reivindicación de las raíces étnicas de los sectores populares; 7) la promoción de canales institucionales de participación como los Consejos Locales de Planificación y aun la participación en las “misiones” del gobierno. A ello se agregaría el desarrollo del movimiento indígena, los medios comunitarios y el movimiento cooperativo. (*Ibíd*: 58)

En el lado negativo, Rondón incluye los siguientes aspectos: 1) la promoción de la idea de un “proceso revolucionario” irreversible; 2) la idolización de Chávez como “líder máximo”; 3) la contribución a crear una narrativa violenta alrededor de las ideas de guerra de clases y revolución; 4) la organización en forma de estructuras paralelas, ligadas al gobierno y sujetas a su uso con fines de poder; 5) la promoción de la intimidación y violencia contra los medios privados, sus representantes y empleados, así como contra los manifestantes de oposición; 6) la promoción de invasiones violentas de tierras rurales y urbanas; 7) la exclusión de organizaciones de la sociedad civil opositoras de reuniones, foros, consejos de planificación pública, y de la participación sociopolítica en general; 8) el rechazo al reconocimiento de la necesidad urgente de diálogo o reconciliación con la sociedad civil de oposición. (*Ibíd*: 78-79)

Las asambleas de ciudadanos

La politización de buena parte de la sociedad civil no había desaparecido, sino que pasó a ser promovida por otros actores, fundamentalmente los radicales que habían visto con escepticismo todo el proceso que llevó al revocatorio. Ella se expresó en las “Asambleas de Ciudadanos”, figura introducida formalmente por la Constitución de 1999. Tal como había ocurrido con el referéndum, esta institución fue instrumentada tanto por el oficialismo como por la oposición, tratando de aprovechar el carácter “vinculante” que la Constitución le otorgaba para dar una apariencia de legalidad y autoridad a sus decisiones.³⁷ En el caso de la oposición, las Asambleas de Ciudadanos surgieron ligadas a la huelga de 2002-2003, por iniciativa de algunas ONG y la coordinadora democrática, y se desarrollaron principalmente en los sectores de clases medias y altas. Según uno de sus promotores, las asambleas

‘Son espacios de deliberación política para discutir estrategias sobre múltiples temas: cómo organizarse para el referendo consultivo o para la Asamblea Nacional Constituyente y la conveniencia de un candidato propio para las próximas elecciones presidenciales, entre otros ítems’.

En colectivo también se resuelven los problemas de abastecimiento derivados del paro cívico nacional; se desarrollan sistemas de seguridad y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de cada barrio y urbanización; deliberan sobre cómo desarrollar los propósitos de reconstruir y reconciliar al país; evalúan y proponen vías para lograr la salida del Poder Ejecutivo Nacional; organizan en comunidad la realización de protestas o la participación en las acciones que convoca la Coordinadora Democrática.[...]

Carvajal aclara que estos instrumentos no pretenden en ningún momento sustituir a las asociaciones de vecinos porque no tratan problemas vecinales sino debates políticos en una forma de democracia directa emparentada si se quiere con el ágora de la democracia griega. (Decarli, 2003)

Curiosamente, sectores sociales claramente opuestos al régimen parecían compartir con éste las ilusiones acerca de la democracia directa y el carácter vinculante de las asambleas; la vertiginosa politización de las clases medias parecía querer alimentarse de cualquier innovación, siempre que ella no fuera vista como instrumento para los partidos políticos. En todo caso, las asambleas tuvieron un importante auge: en un arqueo de noticias publicadas en el año 2003 en el diario *El Universal*³⁸ se encuentran al menos 33 referencias a la constitución de asambleas de ciudadanos en todo el país, entre

³⁷ Para un análisis de las asambleas de ciudadanos hasta diciembre de 2003, véase Rondón (2004, pp. 131-134)

³⁸ Dado que éste es un diario identificado con la oposición y los sectores medios y altos, se presume que dio una cobertura amplia y destacada a este tema.

las cuales una mayoría abrumadora correspondió a la oposición.³⁹ Los temas principales de discusión durante ese año se refirieron, al inicio, a las formas de apoyar la huelga nacional; gradualmente se reorientaron hacia la promoción y defensa de las firmas en pro del revocatorio; sin embargo, en algunos casos se ocuparon de casos menos políticos como problemas del entorno urbano. En 2004 disminuye el número de registros a 23, pero las asambleas tuvieron un importante papel en las protestas que se desataron a principios de marzo contra la decisión de objetar más de un millón de firmas, y en el debate acerca de aceptar o no ir a ratificar las firmas. Pero ya la idea de las asambleas de ciudadanos como instancia de participación fue entrando en el campo de las prácticas cotidianas; grupos como los pacientes crónicos dependientes de la provisión de medicamentos por el Estado utilizaron esta fórmula como mecanismo de comunicación y presión. ("Pacientes crónicos convocan a asamblea", 2004; Díaz, 2004) Y las comunidades territoriales mismas encontraron en las asambleas una forma de revitalizar la participación vecinal, complementando o desplazando a las asociaciones de vecinos. Sin embargo, las asambleas no fueron siempre ajenas a la influencia partidista: en algunos casos fueron promovidas por partidos o candidatos como medio para reclutar y organizar apoyos en las campañas por el referéndum y para las elecciones regionales y locales.

La derrota de la oposición en el referéndum estimuló la celebración de nuevas asambleas, en las cuales se manifestaron fuertes críticas a la dirección de la Coordinadora Democrática y se debatió con intensidad si participar o no en las elecciones del 31 de octubre. La división entre radicales y moderados volvió a presentarse, en forma de debates de dirigentes políticos frente a las asambleas. Un ejemplo de la radicalidad y literalidad con que podían ser interpretadas las atribuciones legales de las asambleas fue la exigencia dirigida al Consejo Nacional Electoral por la Asamblea de Ciudadanos del municipio Los Salias (en la periferia de Caracas) de abrir todas las cajas contentivas de los votos en la elección local.⁴⁰ Sin embargo, llegado el momento del escrutinio la exigencia no se materializó, quizás porque triunfó el alcalde saliente, cuya victoria era lo que pretendía cuidar la asamblea.

En el año 2005, los registros relativos a asambleas de ciudadanos descienden a 20, y muestran una gran heterogeneidad; algunas se refieren a problemas urbanísticos o ambientales, otras a asuntos políticos locales, y un número importante recoge las declaraciones de una organización denominada "Red Nacional de Asambleas de Ciudadanos" que alega representar a 120 de ellas (Peñaloza, 2005a).⁴¹ Y en algunos casos, se reportan discursos de dirigentes políticos emitidos ante "asambleas de ciudadanos", lo cual se asimila más a un discurso de campaña tradicional que a una actividad deliberativa ("Petróleo para seguridad social. Borges en el barrio La Lucha", 2005).

En síntesis, la figura de la Asamblea de Ciudadanos parece haberse arraigado en la cultura política venezolana, aunque su carácter vinculante parece ser más bien de tipo mítico o simbólico. No obstante, representa para muchos ciudadanos de base la sensación (o la ilusión) de una participación directa, no mediada por representantes, en los asuntos que le conciernen. Ante las frustraciones producidas por los fracasos de las grandes organizaciones representativas, la última de ellas la

³⁹ En contraste con *El Universal*, un arqueo similar en el diario *Últimas Noticias* refleja un crecimiento de las referencias a las asambleas desde 30 en 2003 a 67 en 2004 y 229 entre enero de 2005 y junio de 2006. Esta diferencia se puede explicar porque en este último diario las referencias tienen un contenido principalmente social: la asamblea de ciudadanos se ha convertido en un instrumento de las comunidades para formular reclamos y peticiones al gobierno con respecto a servicios, problemas de seguridad o infraestructura, o de los proveedores de servicios públicos para informar acerca de sus planes y negociar con las comunidades..

⁴⁰ Marco Antonio Núñez, miembro de la comisión organizadora de la Asamblea de Ciudadanos de Los Salias, expuso que la acción ejercida está basada en el artículo 70 de la Carta Magna, "en donde es el Poder Ciudadano quien está tomando una decisión que tiene carácter vinculante como lo establece la Constitución." Citó también el artículo 5 de Constitución Nacional que establece que "la soberanía se ejerce directamente y que es intransferiblemente en el pueblo. Por lo tanto, utilizando el mecanismo del artículo 70, nosotros en San Antonio de los Altos, casi 4 mil personas decidimos que en San Antonio se abren las cajas." El asambleísta descartó que con la solicitud se esté violando la autonomía del Poder Electoral. "Estamos hablando que el poder originario reside única e intransferiblemente en el pueblo y que los órganos del Estado están sometidos a las decisiones del pueblo". ("Piden al CNE que el 31 de octubre sean abiertas las cajas en Los Salias", 2004).

⁴¹ Sin embargo, este carácter representativo ha sido cuestionado. Un directivo de la Asamblea de Ciudadanos de Los Palos Grandes afirmaba: "Las asambleas propiamente dichas, la de los ciudadanos, no tienen nada que ver con grupos como la Red Nacional de Asambleas de Ciudadanos. Sin embargo, algunas de estas asociaciones civiles pretenden hablar y comprometer las actuaciones de las asambleas de carácter comunitario, autoerigiéndose en sus voceros", denunció Barrios. Este vecino del este de la capital considera que "esto contribuye a crear confusión en la colectividad, con el agravante de que la mayoría de los miembros de esas agrupaciones no pertenecen o tienen representación de sus asambleas, por lo que podríamos estar hablando de estafa a la fe pública". "Estas asociaciones civiles sin representatividad formal son como espuma de cerveza que se niega a morir", concluyó Barrios. (Peñaloza, 2005b)

Coordinadora Democrática, las Asambleas de Ciudadanos proveyeron un refugio para el ejercicio del debate, la deliberación y la decisión, así ella fuera puramente simbólica.

El "caso" Súmate: de la asesoría técnica a la representación

La asociación civil Súmate surgió a la esfera pública a mediados de 2002. Esta asociación, formada por profesionales y gerentes provenientes del sector privado y sin participación política previa, se plantea como tarea general la promoción del ejercicio de los derechos políticos y en particular la transparencia de los procesos electorales. Cuando la Coordinadora Democrática decidió emprender su primera campaña sistemática de recolección de firmas, acordó que Súmate se convirtiera en el supervisor de la cantidad y calidad de las firmas recogidas. La organización logró desde sus inicios la confianza de la oposición, lo que la convirtió en un germen de poder electoral paralelo. Para la revisión de las firmas que se entregaron en noviembre de 2002, Súmate contó con un grupo de un millar de voluntarios (Morillo, 2002). Es en esta época cuando comienza a consolidarse el papel todavía discreto, pero esencial de Súmate como protector "técnico" de la voluntad ciudadana, por el hecho de prestar el servicio de calificación de las firmas.

Pero Súmate no se conformó con asesorar a la Coordinadora sino que, en concordancia con su misión, emprendió una auditoría externa del Registro Electoral Permanente. Con esta acción ya comenzaba a perfilarse como un evaluador de la idoneidad del Consejo Nacional Electoral y otros organismos públicos responsables de la pureza de tal registro. (Martínez, 2003). No tardaron en aparecer los ataques directos del oficialismo a Súmate, a la que se acusaba de pretender ejercer el papel de árbitro electoral y de disponer de fuentes oscuras de financiamiento (Hernández, 2003).

Las firmas recogidas el 2 de febrero y entregadas el 20 de agosto fueron rechazadas por el nuevo CNE a principios de septiembre. Puesto que una de las razones alegadas por ese organismo para rechazar las firmas era el carácter no representativo de Súmate, la respuesta de la organización trató de delimitar lo más claramente posible su identidad:

"El CNE dijo que Súmate no puede representar a los ciudadanos. Nosotros no somos representantes de los ciudadanos, nosotros somos ciudadanos. Y como ciudadanos y con los ciudadanos hemos apoyado los esfuerzos recientes de la sociedad civil para recabar firmas. Y como ciudadanos y con los ciudadanos vamos de nuevo a recoger firmas el próximo 5 de octubre" (Alonso, 2003)

De esta forma se subrayaba la relación de identidad y de servicio con los ciudadanos, que se convertía en una forma de representatividad más sólida que la formal-electoral.

Aunque Súmate estaba preparada para efectuar una nueva y rápida recolección, la responsabilidad se trasladó al CNE por la vía de un reglamento lleno de formalidades y obstáculos, por lo que no se pudo efectuar el "reafirmazo" sino en noviembre. La asesoría de Súmate a la nueva recolección de firmas, efectuada a fines de noviembre, contribuyó a hacerla más conocida de la base opositora. Asimismo, al organizar una entrega masiva a los firmantes de copias de las planillas en las que habían firmado, en febrero de 2004, su relación de servicio y protección se hizo más tangible: dejaba de ser una abstracción para producir un servicio individual a cada firmante. Al mismo tiempo, la logística de la operación requirió la participación de 5000 voluntarios, con lo que fue formando una base de apoyo mucho mayor a la original (De Vincenzo, 2004a). Ante la aceptación por la Coordinadora Democrática de la necesidad de ratificar firmas, Súmate preparó una jornada de información y de ensayo para los firmantes, para lo cual movilizó a 15000 voluntarios (De Vincenzo, 2004b)

Mientras tanto, arreciaron los ataques oficialistas contra la organización. A instancias del partido de gobierno, la fiscalía abrió en marzo de 2003 una investigación sobre posibles hechos punibles. Ésta sería sólo la primera de varias que en los años siguientes llevarían a la imputación de los principales directivos de Súmate. En septiembre del mismo año, el Vicepresidente de la República solicitó ante la fiscalía una nueva investigación penal, argumentando que Súmate se había atribuido la representación de los electores, había usurpado funciones de un organismo público y había solicitado fondos a organismos extranjeros (Rojas, 2003). Después del éxito en la recolección de firmas de noviembre se multiplicaron los ataques verbales y jurídicos. De acuerdo con el patrón establecido, la ofensiva se inició con una acusación del Presidente en su programa dominical, a la que se sumaron directivos de los partidos oficialistas, de la Asamblea Nacional, e incluso la Procuradora General de la República, quien

adelantó una serie de posibles delitos cometidos por la organización, entre ellos el de traición a la patria. (Álvarez, 2004)

Uno de los ataques principales se dirigía a desvirtuar la identidad de Súmate como organización civil: mientras que para la Procuradora se trataba de un partido político disfrazado de asociación civil, Jorge Rodríguez, rector principal del CNE, siempre se refería a ella como “empresa”. Ambas denominaciones la asimilaban con actores de esferas distintas a las de la sociedad civil, que se mueven por la lógica de la acumulación de poder o dinero. Otro argumento de ataque era el hecho de haber recibido fondos del extranjero para cumplir su misión, con lo cual comenzaba a aplicarse un proceso ya conocido en muchos otros gobiernos autoritarios: el de designar a la disidencia política como brazo de una potencia extranjera.⁴² El 11 de junio de 2004, dos de los directivos principales de Súmate, María Corina Machado y Alejandro Plaz, fueron imputados por “conspiración para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación”, delito cuya pena comprende entre 8 y 16 años de prisión. (Alonso, 2004). Posteriormente se imputó a otros dos directivos por complicidad en los mismos hechos.⁴³

El proceso que culminó en el revocatorio fue observado y criticado por Súmate, que denunció irregularidades en el registro electoral y expresó dudas acerca del resultado del referéndum, sin llegar a formular una acusación explícita de fraude (Súmate, 2004a). A pesar de haber acompañado a la Coordinadora durante todo el proceso, Súmate nunca se asoció formalmente a la misma y mantuvo su carácter de asesor externo. Esto, unido a las críticas formuladas desde antes del evento, permitió que Súmate no fuera alcanzada por la ola de críticas que envolvió a la dirigencia de la Coordinadora. En la medida en que no fue quien tomó la decisión de participar en condiciones adversas, sino que apoyó las decisiones de otros, quedaba libre de responsabilidades políticas y mantenía su prestigio técnico.

Las elecciones regionales y de alcaldes del 31 de octubre de 2004 también fueron objeto de críticas de la organización, por la violación de 9 artículos de la Ley del Sufragio (Súmate, 2004b). A principios de 2005 se efectuó un nuevo reclamo por la omisión —por parte de la Asamblea Nacional— de nombrar a un nuevo CNE, constituido de acuerdo al procedimiento constitucional, para sustituir al designado por el Tribunal Supremo en 2003. Sin embargo, el Tribunal procedió en enero a llenar las vacantes dejadas por las renunciaciones de algunos miembros, acentuando el desequilibrio de fuerzas en el mismo (Súmate, 2005). Más allá del sesgo, la designación misma al margen del procedimiento constitucional ponía bajo sospecha a las elecciones de concejales y juntas parroquiales a efectuarse en agosto y las legislativas de diciembre.

En marzo de 2005 Súmate emprendió un cambio de identidad, al pasar de grupo técnico asesor a “movimiento ciudadano nacional”:

"Decidimos ampliar nuestros objetivos hacia la persecución de una democracia plena para todos los venezolanos. Eso es más importante que remover a un régimen o a otro", explicó el directivo Alejandro Plaz: "Este es un objetivo eterno". [...]

"Los primeros pasos son seguir persiguiendo la realización de elecciones libres, defender a la disidencia contra la discriminación política y desarrollar una verdadera contraloría social que identifique y denuncie las amenazas a la democracia". [...]

Según se vio, la nueva imagen —y seña— del Movimiento Ciudadano Súmate será una mano abierta, con los cinco dedos extendidos porque ese es el número de los requisitos "que caracterizan a las elecciones libres y limpias, contemplados en la legislación electoral venezolana", explicó Machado: "Primero, Registro Electoral y cuadernos de votación depurados, certificados y auditados; segundo, auditorías que aseguren la confiabilidad en los procesos y en la veracidad de los resultados; tercero, eliminación de cualquier procedimiento o dispositivo irrelevante que retarde u obstaculice el ejercicio del voto, como el uso de las máquinas captahuellas y cuadernos electrónicos; cuarto, escrutinio por conteo manual de todos los votos emitidos,

⁴² Súmate nunca ha ocultado que recibió 31.120 dólares del *National Endowment for Democracy* para la realización de programas de formación ciudadana; en 2005 recibió fondos adicionales, con lo cual enfatizaba el carácter legal y público del subsidio y su utilización. (Súmate, 2004c) La visión de Súmate como “agente del imperio” se intensificó cuando el Presidente de los EEUU, George W. Bush, concedió una larga y muy difundida entrevista a María Corina Machado a fines de mayo de 2005.

⁴³ El juicio sigue su curso accidentadamente, entre multiplicidad de eventos judiciales, sin que se haya dictado sentencia a ninguno de los acusados.

impresión de actas y posterior transmisión de datos; y quinto, observación electoral nacional e internacional calificada y certificada". [...]

"Ante el falso dilema de votar o abstenernos, invitamos a la única, digna y legítima opción de activarnos y luchar por nuestro derecho al voto", señaló Machado: "Queremos elecciones limpias". (Medina, 2005)

Estas condiciones se convertirían en una referencia para numerosos ciudadanos, desconfiados ante el sistema electoral pero renuentes a abandonar su derecho al voto. Sin embargo, desde el punto de vista más pragmático de los partidos políticos, ellas parecían utópicas, considerando la conformación y actitudes del CNE. Especialmente el escrutinio manual, aunque previsto en la Ley del Sufragio vigente, se veía como contradictorio con la presencia de las máquinas de votación. Desde este momento hasta diciembre no variaría la posición de Súmate en el sentido de no llamar clara y abiertamente a la abstención, sino exigir condiciones sin las cuales se debería considerar inaceptable ir a votar. El problema era si esas condiciones tenían alguna posibilidad de concretarse.

El dilema sobre participar o no en las elecciones de agosto y diciembre creó grandes polémicas tanto entre partidos y organizaciones civiles como en el interior de cada uno de ellos; los antiguos aliados de la coordinadora se volvieron a polarizar entre "radicales", que sólo creían en la abstención para deslegitimar al régimen, y "moderados" que preferían participar en condiciones imperfectas a entregar todas las instituciones.

El 15 de julio, Súmate expresó en una declaración formal que "el 7 de agosto no habrá elecciones limpias". Predecía que la desconfianza frente al árbitro electoral y el miedo del elector a la violación del secreto del voto generarían abstención. Sin embargo, negaba que estuviera promoviéndola.⁴⁴ Pero simultáneamente con esta declaración, aprovechaba para convocar a un Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas "para conjuntamente discutir y acordar las nuevas formas de lucha y de organización que debe adoptar la sociedad civil venezolana para el rescate de las elecciones limpias y de la democracia." ("Declaración de Súmate", 2005). Dando un paso más en su transformación, ponía a prueba su capacidad de movilización arriesgándose a convocar a organizaciones dispersas, heterogéneas e incluso rivales con el fin de promover algún tipo de red o agrupación de segundo grado. El programa del evento indicaba también una expansión temática mucho más allá del terreno natural de Súmate: "Elecciones, participación y legitimidad electoral; Democracia global: el rol de la comunidad internacional; Agenda de la sociedad civil; Movimiento estudiantil y defensa de la democracia; y Discriminación política." (Súmate convoca al Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas, 2005).

El encuentro se efectuó el 23 de julio, con la asistencia de "150 organizaciones civiles representantes de 17 estados, que debatieron —por espacio de dos horas ...— las pautas de acción del colectivo civil en el corto, mediano y largo plazo." La resolución más importante fue la creación de un Congreso ("nacional", "ciudadano" o "federal") de organizaciones ciudadanas. Otras fueron "...reactivar las protestas estudiantiles de calles, solicitar la renovación de los liderazgos políticos, denunciar "las estrategias subversivas del régimen" y promover la defensa del voto". Según el vocero del evento, el Congreso "se encargará de canalizar las exigencias y necesidades políticas, sociales y legislativas de los venezolanos." (Martínez, 2005)

Llama la atención el que se hayan tomado decisiones tan ambiciosas en apenas dos horas, lo cual permite suponer que muchas de ellas ya estaban pre-acordadas y el debate fue más formal que real. Por otra parte, la pretensión de "canalizar" tan amplio espectro de necesidades parece algo desmesurada. Pero la proposición incluía ya algunos aspectos de diseño institucional:

El Congreso estará integrado, en primera instancia, por seis diputados estatales. Vállez (sic)⁴⁵ no logró precisar el método para designación de estos representantes de la sociedad civil, aunque en su discurso de cierre explicó que la importancia no radica en

⁴⁴ "Que quede claro, Súmate no promueve la abstención electoral. Creemos que hacerlo representaría un menosprecio a la capacidad y la inteligencia de los Venezolanos. Cada venezolano es consciente de sus derechos y sabrá evaluar en su conciencia si asiste a votar o no este 7 de agosto. Los ciudadanos hace tiempo que dejamos de ser pasivos y no vamos a esperar que los demás nos digan qué hacer. Ya los ciudadanos sabemos qué hacer y así lo haremos." ("Declaración de Súmate", 2005)

⁴⁵ Se refiere a Oscar Vállés, directivo de Súmate y vocero del encuentro.

los votos obtenidos por las personas sino en las ideas y derechos ciudadanos que defiendan. (*Ídem*)

Reaparece aquí la tensión entre la “representación asumida” de las organizaciones civiles y la dificultad para fundamentar esa percepción en mecanismos electorales. Tensión que se intensifica cuando se pretende denominar a la organización “Congreso” y a sus miembros “diputados”.

Además de encauzar las necesidades de los ciudadanos, el Congreso Ciudadano tendrá la misión de "enseñarle" a los integrantes de la Asamblea Nacional "cómo se desarrolla un debate parlamentario" y evitar repetir "exclusiones a través de grupos cerrados".

Esta iniciativa no debe considerarse —según explicó Vállez (*sic*)— una instancia legislativa paralela a la estructura formal del Estado. "Una cosa son los organismos naturales y otra cosa es la independencia de los ciudadanos para organizarse", indicó el representante de Súmate, luego descartó que este tipo de organización "pueda ser una afrenta a los órganos del Estado", aunque insistió en que el Parlamento de ciudadanos se encargará de conducir los problemas y formular propuestas legislativas. (*Ídem*)

Tal como ocurría con las organizaciones agrupadas en Sinergia seis años atrás, las organizaciones civiles afirman su superioridad sobre los políticos profesionales (sin distinguir entre los de gobierno y oposición), generosamente ofrecen sus servicios pedagógicos, y afirman que no crearán una instancia legislativa paralela... aunque ella desarrollará una actividad legislativa. Finalmente, pareció precisarse cuál era el espacio a ser ocupado por esta nueva forma de organización y liderazgo:

De la adrenalina del acto de masas en al (*sic*) sala Anna Julia Rojas a la rueda de prensa formal, algunos conceptos fueron matizados. Inicialmente, en la clausura del evento, Jesús Pérez Pérez, de la Red de Ciudadanos, indicó que se debían rechazar los liderazgos políticos tradicionales.

Minutos después, Vállez (*sic*) precisó que la idea "es solicitar a los dirigentes que revisen sus postulados, sus prácticas y por qué llegan a ser excluyentes —por sus ocupaciones— para escuchar y enfocar las necesidades de la sociedad civil". (*Ídem*)

En el contexto del duro debate entre abstencionistas y participacionistas que se daba en ese momento en la esfera política, la pretensión de formar una organización de ámbito nacional con una agenda política ambiciosa era un paso más en un proyecto estratégico: Súmate aprovechaba su capital político construido en el campo electoral y la decepción ciudadana ante el fracaso de la Coordinadora para dar un nuevo giro a su identidad y ampliar su espacio político.⁴⁶

En septiembre, Súmate anunció que el National Endowment for Democracy había aprobado un nuevo financiamiento, esta vez por 107200 dólares, para continuar la formación de voluntarios en el tema de ciudadanía. A ello agregó que también había recibido 16000 dólares de la Embajada de Canadá y 20 millones de bolívares de la Fundación Konrad Adenauer. (“NED otorga nuevo aporte financiero a Súmate”, 2005)

Con esta declaración desafiaban el fundamento del juicio penal contra los directivos, ya que el centro de la acusación era precisamente haber recibido fondos del NED. Esto situaba a la fiscalía en el dilema de distinguir si el delito consistía en recibir fondos del extranjero, en recibirlos del NED, o en el uso que se daba a los fondos. Si se tratara de lo primero, entonces deberían ser acusadas varias decenas de organizaciones, entre las cuales se encuentran muchas de derechos humanos y de desarrollo social. Si el argumento fuera el donante, se percibiría más claramente el carácter político de la acusación, ya que

⁴⁶ El comité promotor del llamado finalmente “Congreso Federal de Organizaciones Ciudadanas” se instaló en octubre, e incluía algunas organizaciones conocidas, que se habían destacado en las luchas del período 2002-2003, como Gente del Petróleo y Ciudadanía Activa, grupos de formación ciudadana como Liderazgo y Visión, pero también grupos menos conocidos como la Red Nacional de Asambleas de Ciudadanos y Sociedad en Acción. El ámbito de las organizaciones a agrupar sería amplio: "Nos referimos a asociaciones civiles, asambleas de ciudadanos, comités de usuarios, movimientos estudiantiles, gremios, colegios profesionales y todo tipo de organización que quiera participar". Finalmente, se consideraba que el Congreso "es una realidad, pues ya hay grupos promotores constituidos en 15 estados venezolanos y para diciembre tenemos proyectado que estarán trabajando en 18 estados." (Castillo, 2005)

los fondos provenientes de las otras organizaciones sirven para los mismos fines; y si fuera el de las actividades, habría que demostrar el carácter “conspirativo” de los cursos de formación ciudadana.⁴⁷

Al acercarse las elecciones parlamentarias de diciembre, Súmate intensificó las críticas contra el CNE y su conducción del proceso electoral. Pocos días antes de la jornada electoral, Súmate convocó a la población a congregarse en las iglesias ese domingo en horas del mediodía. Otra vez sin llamar abiertamente a la abstención, esta convocatoria reflejaba posiciones anteriores de grupos radicales, que esperaban, con estas reuniones, que los medios pudieran contrastar iglesias llenas con centros de votación vacíos. Aunque en los últimos días los partidos lograron arrancar algunas concesiones al CNE, el escepticismo del electorado de oposición se manifestaba en las encuestas. El descubrimiento de una vulnerabilidad en las máquinas de votación que hacía dudar sobre el secreto del voto fue la justificación que algunos actores buscaban para retirarse de la contienda. Si algunos opositores de base habían sido convencidos a duras penas, generalmente con argumentos que apelaban a la racionalidad política, para ir a votar, la sensación de que el CNE había sido atrapado en flagrante delito justificaba todas las aprensiones e incluso reavivó el fantasma del nunca demostrado fraude del 15 de agosto.

La elevada tasa de abstención del 4 de diciembre puede ser interpretada como un triunfo de los partidos y grupos abstencionistas, pero quizás lo es más de Súmate, en la medida en que su discurso abstencionista indirecto daba a los electores la sensación de ser ellos mismos quienes tomaban la decisión de no votar, y no lo hacían por seguir una línea partidista ni a un líder político (en general, tan desprestigiados como los políticos participacionistas).

Quizás en diciembre de 2005 se cerró un ciclo: el que comenzó en 2002 cuando la Coordinadora Democrática, sólidamente apoyada por las bases opositoras, se planteó la ayuda de una organización técnica para legitimar su estrategia electoral; ahora esas mismas bases daban mucho mayor credibilidad (o en otras palabras, se sentían más “representadas” por él) a un actor que había desbordado de sus estrechos límites para convertirse en una referencia sociopolítica alternativa, y sin usar la palabra “abstención” les proveía de los argumentos para ejercerla y justificarla.

Al iniciarse la coyuntura de la elección presidencial prevista para diciembre de 2007, Súmate volvió a ocupar un lugar central por ser el principal promotor de la realización de unas elecciones primarias entre los candidatos de oposición para que ésta pudiera presentarse con un candidato único para enfrentar al presidente Chávez. Dado que la estrategia de las primarias no coincidía plenamente con las de todos los candidatos, se produjeron fuertes polémicas entre los opositores, y Súmate pasó a formar parte del debate entre los actores políticos, siendo elogiada por los partidarios de las primarias y atacada por quienes preferían otros métodos para escoger al candidato unitario.

En el corto plazo de tres años, Súmate ha efectuado una notable transformación que la ha llevado a enfrentar los dilemas de muchas otras organizaciones: ¿dónde terminan los límites de la sociedad civil y comienzan los del sistema político? ¿Se convertirá en un partido político, como la acusan algunos, o será un ejemplo más de esas organizaciones híbridas que, precisamente para conservar su influencia y prestigio, evitan adoptar esa forma?⁴⁸ ¿Logrará convertirse en líder de una federación nacional de organizaciones de la sociedad civil para, desde allí, influir sobre las políticas y los políticos? En todo caso, ella podría ser un ejemplo más de la disolución de las fronteras entre lo civil y lo político, la que, una vez iniciada, no parece ser reversible.

Conclusiones: ¿disolución de las fronteras?

Al comienzo de este trabajo planteamos la posibilidad de que las fronteras entre la sociedad civil y la sociedad o sistema político se hayan difuminado hasta tal punto que sea difícil reconstruirlas. Pero este cambio no deja intactos a los actores que se mueven entre uno y otro campo, ya que su identidad misma entra en juego al cambiar los parámetros de sus relaciones con sus bases, con otros actores y con las instituciones. Al introducirse plenamente en el campo de la política y el poder, la cuestión de la

⁴⁷ De hecho, los directivos de Súmate no han sido los únicos en ser procesados penalmente por recibir fondos del NED. Igual suerte corre Leonardo Carvajal, directivo de la asociación civil Asamblea de Educación, acusado en los mismos términos. “Fiscalía imputó a Leonardo Carvajal” (2004)

⁴⁸ Para el politólogo Carlos Romero, “luego de lo ocurrido el 4 de diciembre, “ya no podemos decir que Súmate es una ONG, sino que se convierte en un actor político fundamental en el futuro democrático venezolano y, en particular, en el sector de la oposición””.(Peñaloza, 2005c)

representatividad es la primera pregunta que se ofrece como barrera: ¿y usted a quién representa? ¿En nombre de qué o quién pretende ser oído? Si el actor no se resigna a entrar en los moldes tradicionales de las organizaciones políticas, debe formular soluciones creativas que le permitan mantener su identidad y a la vez legitimarse como actor con tantos derechos como los que ya ocupan el terreno.

Apoyándonos en la tipología de formas de “representación asumida” de Gurza *et al.*, hemos tratado de explorar las formas en las que organizaciones de los tipos más diversos han enfrentado los dilemas de ocupar esa amplia zona gris entre lo social y lo político, “sin modelos” a los cuales referirse, dado el carácter inédito de muchos de los procesos sociopolíticos actuales. Experimentos como el respaldo de organizaciones sociales a candidatos a cargos legislativos, la participación de gremios y sindicatos en huelgas de claro contenido político, la formación de coordinadoras donde logran coexistir partidos y organizaciones civiles; la promoción de organizaciones sociales desde el Estado, que se mueven entre la cooptación y la autonomía, la creación de espacios locales de deliberación y decisión, y la transformación de organizaciones técnico-asesoras en líderes de opinión, son una muestra de la apertura y diversidad de opciones que han venido adoptando los viajeros en este territorio sin mapas ni brújulas. Aunque procesos como éstos no son exclusivos de Venezuela, en la actual coyuntura de transición del país parecen exigir respuestas más urgentes, ya que para los actores de uno y otro bando, y aun los que pretenden ocupar espacios neutrales, lo que está en juego es la posibilidad misma de convivencia pacífica en un territorio, bajo un orden legítimo y democrático.

REFERENCIAS

- ARDITI, Benjamín. Trayectoria y potencial político de la idea de sociedad civil. *Revista Mexicana de Sociología*. 2004, año 66., núm.1, , pp. 1-21.
- ARENAS, Nelly y GÓMEZ CALCAÑO, Luis. Los círculos bolivarianos: el mito de la unidad del pueblo. *Revista Venezolana de Ciencia Política* .2004, Vol.25, pp. 5-37.
- CARIOLA, Cecilia y LACABANA, Miguel. Globalización y metropolización. Tensiones, transiciones y cambios, en: CENDES. *Venezuela visión plural: una mirada desde el CENDES*. Caracas, CENDES-bid&co. 2005, pp. 272-292
- CARVALLO, Gastón La indisciplina social y la lucha por el poder en el caudillismo, en: Carvallo, Gastón, O. Castillo y N. Prato. *Desobediencia social en Venezuela*. Caracas, CENDES-APUCV-IPP. 1990, pp. 21-45
- CHALMERS, Douglas. Vínculos de la sociedad civil con la política. *Nueva Sociedad*. 2001, N° 171, pp. 60-87
- COHEN, Jean L. Sociedade Civil e Globalização: Repensando Categorias. *DADOS – Revista de Ciências Sociais*. 2003, Vol. 46, no 3, pp. 419-459.
- COMANDO SUPREMO REVOLUCIONARIO BOLIVARIANO. *Círculos Bolivarianos*, Caracas, s/e, s/f. [¿2001?]
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000.
- COPPEDGE, Michael. Parties and Society in Mexico and Venezuela: Why Competition Matters. *Comparative Politics*. 1993, Vol. 25, 3, pp. 253-274.
- CORONIL, Fernando. *The Magical State: Money, Nature and Modernity in Venezuela*. Chicago: Chicago University Press, 1997.
- ELLNER, Steve. Obstacles to the consolidation of the Venezuelan neighbourhood movement: national and local cleavages. *Journal of Latin American Studies*. 1999, 31.1, pp. 75 (2).
- GARCÍA-GUADILLA, María Pilar, Constitucionalización de la racionalidad ambiental: conflictos y desafíos para la democracia y el movimiento ambientalista. *Threats to Democracy in Latin America*. University of British Columbia, Vancouver, BC 2000. Submission for a special issue of the Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies

- GARCÍA-GUADILLA, María Pilar. Actores, organizaciones y movimientos sociales en la Venezuela del 2000: logros, problemas y desafíos. En: RAMOS ROLLÓN, Marisa ed. *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político 1999-2001*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2002, pp. 247-273.
- GARCÍA-GUADILLA, María Pilar. Sociedad civil: institucionalización, fragmentación, autonomía, en: ELLNER, Steve y HELLINGER, Daniel (editores). *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*. Caracas, Nueva Sociedad, 2003, pp. 231-251.
- GARCÍA-GUADILLA, María Pilar y HURTADO, Mónica. Participation and Constitution Making in Colombia and Venezuela: Enlarging the Scope of Democracy? Ponencia presentada en el XXII Congreso Internacional de LASA Latin American Studies Association. Miami, 16-18 de marzo. 2000
- GARCÍA-GUADILLA, María Pilar y ROA Ernesto. La red de organizaciones sociales liberales y la democracia en Venezuela: potencialidades y limitaciones. *Cuadernos del CENDES*. 1998. Año 14, N° 35, Segunda época, , pp. 55-80.
- GARCÍA-GUADILLA, María Pilar y SILVA QUERALES, Nadeska. De los movimientos sociales a las redes organizacionales liberales en Venezuela: estrategias, valores e identidades. *Politeia*. 1999, N° 23, pp. 7-27.
- GEIGEL LOPE-BELLO, Nelson *La defensa de la ciudad*. Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1979
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis, Crisis de legitimidad e inestabilidad política en Venezuela, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*. 1995, N° 2-3, pp. 103-164.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis, Ciudadanía, sociedad civil y municipio, en: MASCAREÑO Carlos, coordinador, *Descentralización, Gobierno y Democracia*, Caracas, CENDES, Gerencia y Gestión Local. 1998a
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis Civic organizations and reconstruction of legitimacy in Venezuela, in: CANACHE, Damarys and KULISHECK, Michael. *Reinventing Legitimacy. Democracy and Political Change in Venezuela*. Westport : Greenwood Press. 1998b.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis. Sociedad civil y proceso constituyente en Venezuela: encuentros y rivalidades. Ponencia presentada en el XXII Congreso Internacional de LASA, Latin American Studies Association. Miami, 16-18 de marzo 2000.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis La batalla por la sociedad civil en Venezuela. Ponencia presentada en el XXIII Congreso Internacional de LASA, Latin American Studies Association Washington, D.C., 6-8 de septiembre 2001.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis y PATRUYO, Thanalí. Venezuela: entre espoir populaire et crise économique. *Problèmes d'Amérique Latine*. 1999. N° 34, pp. 117-147.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis y Nelly Arenas ¿Modernización autoritaria o actualización del populismo? La transición política en Venezuela, en: RAMOS ROLLON, Marisa (ed.) *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político 1999-2001*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2002. pp. 37-68.
- GONZÁLEZ DE PACHECO, Rosa Amelia. Las organizaciones de ciudadanos en Venezuela: su relación con la política. Maracaibo, jornadas de la sección Venezuela de LASA. 2002
- GONZÁLEZ DE PACHECO, Rosa Amelia. Las organizaciones de ciudadanos en Venezuela: ¿ser o no ser actores políticos? Ponencia presentada al XXIV Congreso Internacional de Latin American Studies Association LASA Dallas, Texas, 27-29 de Marzo 2003
- GURZA, Adrián, HOUTZAGER, Peter y CASTELLO, Graziella. *In whose name? Political Representation and civil organisations in Brazil*. Brighton, 2005. IDS Working Paper 249.
- HANES DE ACEVEDO, Rexene Los vecinos: la movilización de los recursos del municipio. En: Janet Kelly coordinadora, *Gerencia Municipal*. Caracas, Iesa, 1993, pp. 183-210.
- HAWKINS, Kirk y HANSEN, David . Dependent Civil Society: The Círculos Bolivarianos in Venezuela. *Latin American Research Review*. 2006, Vol. 41, N° 1, p. 102-132
- HURTADO, Samuel *Dinámicas comunales y procesos de articulación social: las organizaciones populares*, Caracas, Tropykos/APUCV. 1991
- KARL, Terry Lynn. *The paradox of plenty. Oil booms and petro-states*. Berkeley: University of California Press, 1997

LEVINE, Daniel H. y ROMERO, Catalina . Urban Citizen Movements and Disempowerment in Peru and Venezuela. Conference on The Crisis of Democratic Representation in the Andes, Kellogg Institute, University of Notre Dame, May 13 2002.

MANIN, Bernard *Los principios del gobierno representativo*. Madrid: Alianza, 1998

MASCAREÑO, Carlos (coordinador). *Balance de la descentralización en Venezuela: logros, limitaciones y perspectivas*. Caracas: PNUD-ILDIS-Nueva Sociedad, 2000.

MIJARES DE LAURÍA, Silvia *Sociedad civil. Alcance del concepto de sociedad civil en nuestra historia. Su necesidad y su vigencia*. Caracas: Tierra de Gracia, 1996.

PATRUYO, Thanalí Los partidos políticos en la transición 1989-2004: de la desconsolidación a la antipolítica, en: CENDES, *Venezuela visión plural: una mirada desde el CENDES*. Caracas, CENDES-bid& co., 2005, pp. 372-414.

RAY, Talton F.. *The Politics of the Barrios in Venezuela*, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1969.

RAMOS ROLLÓN, María Luisa. *De las protestas a las propuestas: identidad, acción y relevancia política del movimiento vecinal en Venezuela*. Caracas: Nueva Sociedad, 1995.

RONDÓN, David A. *Divided by a President, United by a Constitution: Civil Society and the Future of Democracy and Peace in Contemporary Venezuela*. Graduate thesis, New York University, 2004. (Inédito).

SALAMANCA, Luis. La sociedad civil venezolana en dos tiempos: 1972-2002. *Politeia*. 2003, N° 30, pp. 119-156

VILAS, Carlos M. La hora de la sociedad civil. *Análisis Político*. 1994N° 21, , pp. 5-14.
<http://168.96.200.17/ar/libros/colombia/assets/own/analisis%20politico%2021.pdf>

PRENSA

AIQUEL, Pablo. Los círculos bolivarianos sustituirán a las asociaciones de vecinos. *El Nacional*, Caracas, 21-10-2001

ALONSO, Juan F. Súmate participará en el plan para recolectar las nuevas rúbricas *El Universal.com*, Caracas. 13-9-2003

ALONSO, Juan F. Machado fue imputada por conspiración *El Universal.com*, Caracas. 11-6-2004.

ÁLVAREZ, Irma. Súmate es un disfraz de asociación civil. *El Universal.com*, Caracas. 22-2-2004

ANGARITA, Ana Marisol, Círculos Bolivarianos fortalecen presencia. *Últimas Noticias*, 18-12- 2003

BOTÍA, Alejandro. Culmina activación de comandos Maisanta. *Últimas Noticias*, Caracas, 2-7-2004, p. 12

BOTÍA, Alejandro. Círculos bolivarianos parecen burbujas en el limbo. *Últimas Noticias*, Caracas, 20-3-2005 (a), p.20

BOTÍA, Alejandro. Rollos palaciegos enredaron a los círculos bolivarianos. *Últimas Noticias*, Caracas, 21-3-2005 (b), p. 15

BOTÍA, Alejandro. Florentinos esperan por la batalla endógena *Últimas Noticias*, Caracas, 6-4-2005(c), p. 22

CARRILLO, José Luis. El comando Maisanta no se desvela por la pregunta. *Últimas Noticias*, Caracas, 12-6-2004, p. 10

CASAS, Cenovia. Diseño de poderes públicos pone en peligro logros en derechos humanos. *El Nacional*. Edición Digital, 11-12-1999.

CASTILLO, Vivian. Crean Congreso Federal de Organizaciones Ciudadanas. *El Universal.com*, Caracas. 19-10-2005

Círculos Bolivarianos unifican criterios. *El Universal.com*, Caracas. 17-6-2005

DECARLI, Marisol. Todo el poder para el ciudadano. *El Universal.com*, Caracas. 7-1-2003

Declaración de Súmate. *El Universal.com*, Caracas. 15-7-2005

DE VINCENZO, Teresa. 300 mil constancias entregó Súmate *El Universal.com*, Caracas. 15-2-2004(a)

DE VINCENZO, Teresa. Operación remate ensaya reparos *El Universal.com*, Caracas. 8-5-2004(b)

DÍAZ, Pilar. La salud del pueblo no tiene color político. *El Universal.com*, Caracas. 26-7-2004

DUARTE, Alexander. Asociación Nacional de ONG inicia postulación de candidatos a la Asamblea. *El Nacional*. Edición digital, 22-12-1998

Fiscalía imputó a Leonardo Carvajal 2004. *El Universal.com*, Caracas. 29-6-2004

HERNÁNDEZ, Taynem. MVR solicitará a FGR que investigue fuentes de financiamiento de Súmate. *El Universal.com*, Caracas. 19-8-2003

ID. En Plaza formaron más de 350 organizaciones sociales. *Últimas Noticias*, Caracas, 24-7-2005, p. 49

JANICKE, Kiraz. Political youth organizations reflect different ideas and currents of thought. Sunday, November 13, 2005, en: <http://www.vheadline.com/readnews.asp?id=46894>

LÓPEZ, Edgar. La sociedad civil no se dejará 'aplastar' por los partidos políticos. *El Nacional*, Caracas. Edición Digital. 3-5-1999

MARTÍNEZ, Eugenio. Súmate prepara firmazo alternativo. *El Universal.com*, Caracas. 4-7-2003

MARTÍNEZ, Eugenio. Crearán congreso federal de asociaciones ciudadanas. *El Universal.com*, Caracas. 24-7-2005

MEDINA, Oscar. Instarán a TSJ a cambiar autoridades electorales. *El Universal.com*, Caracas. 13-3-2005

NED otorga nuevo aporte financiero a Súmate 2005 *El Universal.com*, Caracas. 13-9-2005

OJEDA, Yolanda. Promueven primarias para escoger candidato. *El Universal.com*, Caracas. 18-7-2004

Pacientes crónicos convocan a asamblea. *El Universal.com*, Caracas. 21-4-2004

PEÑALOZA, Pedro Pablo. No convalidaremos un fraude. *El Universal.com*, Caracas. 6-7-2005

Petróleo para seguridad social. Borges en el barrio La Lucha. *El Universal.com*, Caracas. 12-9-2005

Piden al CNE que el 31 de octubre sean abiertas las cajas en Los Salias, 2004 *El Universal.com*, Caracas. 13-10-2004

REYES, Ascensión. El gobierno divide a la sociedad civil, *El Nacional*, Caracas. Edición Digital. 5-9-2000

REYES, Ascensión. Ley de Poder Municipal deja en el limbo a las asociaciones de vecinos. *El Nacional*, Caracas, 1-5-2005, D/6

Súmate convoca al Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas 2005, Caracas, Edición Digital. 19-7-2005

TEJERO, Suhelis. Empleados públicos protestarán. *El Universal.com*. Caracas, Edición Digital. 15-12-2005.

DOCUMENTOS EN LÍNEA

CHÁVEZ, Hugo. Programa Nro. 40 Aló Presidente. Domingo, 27 de agosto de 2000, en: <http://www.misionvenezuela.gov.ve/AloPresidente/2000/pdf/AP-040.pdf>

CHÁVEZ, Hugo. Programa Nro. 207 Aló Presidente. Desde la refinería de Puerto la Cruz, estado Anzoátegui. Domingo, 10 de octubre de 2004, en: http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/docMgr/sharedfiles/Alo_Presidente_207.pdf

CHÁVEZ, Hugo. Discurso del Presidente Chávez en el Estado Vargas, 28 de octubre del 2004, en: http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/docMgr/sharedfiles/Discurso_Presidente_Vargas_28oct2004.pdf

SÚMATE Pronunciamiento Oficial de la Asociación Civil Súmate sobre el Referendo Revocatorio Presidencial. 23 de agosto de 2004 (a), en: <http://www.sumate.org/notap17.asp>

SÚMATE. En las elecciones regionales, el CNE está fuera de la ley, 2004 en: <http://www.sumate.org/documentos/CNE%20is%20Outside%20the%20Law.pdf>

SÚMATE ¿Esto es una conspiración?, en: <http://www.sumate.org/documentos/Is%20This%20a%20Conspiracy.pdf>

SÚMATE. TSJ usurpa funciones de la Asamblea Nacional, en: <http://www.sumate.org/images/Aviso-def-23-enero-2005.gif>.